

LA LEY DE GRANOS

EL DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN AGRARIA DE LA HONORABLE
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (¹)

POR EL ACADÉMICO INGº AGRº F. PEDRO MAROTTA

(EL AUTOR RUEGA A LAS PERSONAS, QUE SE OCUPAN DE LA LEY DE GRANOS Y UTILICEN LOS ANTECEDENTES
ARGUMENTOS, IDEAS Y OPINIONES DE ESTE TRABAJO, SE SIRVAN INDICAR LA FUENTE)

I

Campaña injustificada. Resumen de las objeciones a la Ley de granos

La Comisión de legislación agraria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha despachado el proyecto de Ley de granos, que enviara el Poder Ejecutivo con fecha 10 de agosto de 1932.

Antes de hacer el análisis del mismo, creo de interés tomar en cuenta las objeciones generales, que se han formulado, sobre la necesidad de la Ley de granos.

Pocas iniciativas han suscitado una resistencia tan grande como injustificada, realizándose una campaña de propaganda sensacionalista, a base de sofismas y faramallas más o menos hábiles, encaminada a crear un ambiente contrario a la ley, extraviándose a la opinión pública. El Centro de Exportadores de Cereales, en vez de engolfarse en el problema jurídico, que pudiera plantear la ley, ha hecho algo más práctico, que es ponerse en la empresa de demostrar su inutilidad e impracticabilidad, agitando el fantasma de los graves peligros que, con su sanción, amenazarían a la economía del país.

Deploro que el Ministerio de Agricultura haya permitido, con su silencio, que se realizara, impunemente, esta campaña, sin abandonar su mutismo ni aun cuando una de las grandes casas exportadoras, en los diarios del 14 de agosto próximo pasado, a gran espacio, invocando el

(¹) Conferencia pronunciada por el presidente de la Academia, ingeniero agrónomo F. Pedro Marotta, el 6 de junio de 1933, en el aula Wenceslao Escalante de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires.

Ver en el volumen de las *Jornadas Agronómicas*, el segundo trabajo del autor sobre la Ley de granos.

testimonio de Sir Herbert Robson, afirmó que no le había sido posible descubrir en Londres la existencia del World Cereal Laboratory, cuyos análisis de tipos de trigo de distintas procedencias mencionaba el Poder Ejecutivo, en su mensaje, para demostrar la superior calidad de los trigos argentinos.

Me propongo, pues, llenar este vacío, en lo posible, desde la cátedra de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, haciéndome cargo, rápidamente, de algunas de las objeciones principales que se han hecho a la Ley de granos, convencido como estoy de su imprescindible necesidad. Poseo algún conocimiento de estos asuntos por haber sido delegado del Ministerio de Agricultura, durante 4 años, en la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde la época en que la presidiera don Adán Traverso, un cerealista cuya muerte inesperada fué una pérdida irreparable para el país.

Resumo a continuación las observaciones más importantes, que se han opuesto a la sanción de la ley :

1ª Que la Ley de granos es un atentado a la libertad de comercio e invade el campo del derecho privado (Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario, Confederación del Comercio, la Industria y la Producción, etc.), sin que exista, ni remotamente, en la legislación argentina, antecedente alguno de una intervención tan absoluta en las actividades privadas ;

2ª Que la Ley de granos no es necesaria; que perturbará en forma profunda el comercio cerealista y hasta será contraproducente para los mismos productores, a quienes se desea proteger;

3ª Que la tipificación o graduación de los granos no representa ninguna ventaja efectiva, como lo prueba el hecho de que la Argentina y Australia, donde no existe, han logrado, en ciertas épocas, mejores precios por sus trigos que Canadá y Estados Unidos, donde hay clasificación, inspección obligatoria y certificado; que, por otra parte, no es posible hacer tipos o grados definidos y estables en la Argentina como sucede en el Canadá por la uniformidad de su ambiente natural ;

4ª Que la Ley de granos no valorizará la producción argentina, y que nuestro sistema de comerciar los cereales es el mejor del mundo;

5ª Que lo único efectivo que resultará de la Ley de granos será una nueva carga de dos centavos para el agricultor que, en la práctica, subirá a cinco, por quintal, y que la Ley de granos fomentará la burocracia y la intriga y favoritismo político.

PRIMERA OBJECCIÓN

Que la Ley de granos atenta contra la libertad de comercio e invade el campo del derecho privado, sin que exista ni remotamente en la legislación

argentina antecedente alguno de una intervención tan absoluta en las actividades privadas.

Las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario son las que han repudiado con más energía el proyecto, en nombre de la libertad del comercio. « En la libertad del comercio, dice la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estriba todo el mecanismo del intercambio económico, las relaciones entre los pueblos y entre los que ejercen la vida de los negocios. » Esa ha sido la tradición del país. Recuerda a Mariano Moreno, en la *Representación*, y a Alberdi, en las *Bases*. Invoca la Constitución Nacional.

Pero, ¿de qué libertad de comercio se habla? ¿Acaso de la que gemía ahogada por los monopolios de toda índole, los *trusts*, los *pools*, los *cartells*, las primas, las cuotas, el *dumping*, los aranceles aduaneros, el proteccionismo en todas sus formas hasta consagrarse en la apoteosis del nacionalismo económico, que ha generado el caos actual? Este es el mito de la libertad del comercio, del libre juego de la ley de la oferta y la demanda, de la libre concurrencia, que ha caracterizado a la economía capitalista, cuyos abusos, arbitrariedades y escándalos, han dado origen a una nueva forma de delito, el delito económico, obligando a la intervención del Estado, en nombre de los poderes de policía, que le son privativos.

Porque si la Nación es una comunidad de hombres, reunidos bajo un régimen común con el objeto de ayudarse y prosperar por sus esfuerzos combinados, según la clásica definición de Joaquín V. González, es evidente que el Estado, sin atribuirse la condición de comerciante o industrial, tiene el derecho inmanente, por esencia de su propia soberanía, de evitar los excesos del individualismo, del egoísmo o interés particular, en nombre del orden, de la concordia, de la prosperidad general y de la justicia social.

Por eso, en las nuevas constituciones, aparece una nueva categoría de derechos, los derechos sociales, no precisamente por doctrina socialista, sino por obra también de los elementos más moderados, en procura de su propia salvaguarda, « porque en el siglo XX, dice B. Mirkive-Guetzevitch (*Las nuevas constituciones del Mundo*, Editorial Espasa, 2ª edición, pág. 37), el sentido social del derecho, no es sólo una doctrina, no es sólo una escuela jurídica, es la vida misma. El Estado no puede sólo limitarse al reconocimiento de la independencia jurídica del individuo, debe crear un *mínimum* de condiciones necesarias para asegurar su independencia social ».

Mariano Moreno. El comercio y los agricultores

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha traído el recuerdo de Mariano Moreno en su célebre *Representación de los Hacendados*, pero es el caso de decir que Moreno no abogaba por los comerciantes de las ciudades, sino en favor de los humildes labriegos de las campañas del Río de la Plata.

Los comerciantes, dice el prócer, defendían a grandes voces la observancia de las leyes prohibitivas del comercio extranjero a la puerta de su tienda en que no se encuentra sino géneros ingleses de clandestina introducción.

Con argumentos semejantes a los que ahora se esgrimen contra la Ley de granos, afirmaban que la agricultura, de abrirse el comercio, llegaría al último desprecio, quedando arruinadas las artes y las industrias. Mientras tanto, la agricultura había llegado a tal grado de abatimiento que se cegaba con trigo los pantanos de la ciudad.

Pero nada habla más alto de los propósitos y de las ideas de Mariano Moreno que esta elocuente y sugestiva página : « ¿Qué viene a ser el comercio? Es el movimiento o circulación de los objetos de cambio, por el que nos deshacemos de nuestros sobrantes y adquirimos lo que nos hace falta. ¿Quiénes son los que contribuyen más al comercio y, por consiguiente, sus partes esenciales? Son los creadores de los objetos de cambio naturales o manufacturados : son los agricultores y los artesanos. Vosotros, comerciantes de los puertos de mar, vosotros no sois sino los corredores, los trajineros del comercio; más, en muchos casos, sus mayores enemigos, por el precio exorbitante que ponéis a vuestra intervención. ¿Miráis en vuestras operaciones el bien del Estado? No; el oro es vuestro dios y el objeto de vuestras diligencias, como lo prueba el que siempre os he visto contentos de la escasez y pesarosos de la abundancia. »

« Decís que protegéis al labrador y al artesano; pero, ¿cómo los protegéis? Adelantándoles socorros de poca monta sobre su cosecha o su trabajo, con condiciones tan usurarias, que en lugar de sacarles del ahogo, vuestro socorro les sumerge más y más en la pobreza. »

« El comerciante, como vosotros decís, es cosmopolita o ciudadano del universo. ¿Cuáles son vuestras miras en vuestro comercio con las colonias? Estrujar y aniquilar de tal suerte a los colonos, que en cuatro o seis años podáis contar con una fortuna hecha, y que no hubierais podido formar por un comercio de ganancias moderadas en quince o veinte. En consecuencia ¿cómo tratáis al comercio? Como un viajero trata los muebles de un cuarto alquilado. » (*Representación. Escritos políticos y económicos. La Cultura Argentina*, 1915, pág. 152.)

Computo, pues, el voto de Mariano Moreno a favor de la Ley de granos y pienso que si en 1809, bajo el absolutismo de la metrópoli, fué capaz de un alarde tan magnífico de valor cívico, en su memorable alegato de tanta trascendencia jurídica, social, económica y política ;qué no diría hoy, apoyando la Ley de granos o de carnes, en defensa de los agricultores y de los ganaderos del Río de la Plata!

Se ha invocado también a Alberdi y la Constitución Nacional, pero ya dejaremos este argumento para más adelante, al término de la conferencia.

Funciones de carácter público. El comercio de los cereales

Se arguye, asimismo, que la Ley de granos invade el campo del derecho privado; pero, en realidad, como lo hace constar *La Prensa* (23 de mayo ppdo.), la fiscalización de los cereales está a cargo de comerciantes y entidades que ejercen, prácticamente, funciones de carácter público. No otra cosa significa la formación de tipos, los tribunales de arbitraje, la fijación de precios oficiales, etc. No hay, por otra parte, en el país, como lo reconoce la Confederación del Comercio, la Industria y la Producción (Nota a la H. Cámara de Diputados de la Nación, de septiembre 26 de 1932), no hay, repito, comercio alguno que pueda compararse, ni siquiera remotamente, por su volumen o por el número de personas que intervienen en él, con el comercio de granos. Agréguese que se trata de artículos de primera necesidad; que la negociación de las cosechas sirve para equilibrar nuestro balance de pagos y mantener la estabilidad de nuestra moneda, representando, con los productos de la ganadería, todo el *quantum* de nuestra exportación, para comprender que el Estado no puede cruzarse de brazos, dejando hacer y dejando pasar, en resguardo de los intereses superiores de la Nación.

Un antecedente legislativo más severo que la ley proyectada

La Confederación del Comercio, la Industria y la Producción, en la nota citada, sostiene que « se trata de legislar el comercio de granos en particular, imponiéndose normas legislativas obligatorias hasta en sus menores detalles, en una forma tan minuciosa, que no existe ni remotamente antecedente alguno en la legislación argentina, de una intervención tan absoluta en las actividades privadas ».

Al hacer este aserto, la Confederación olvidaba sin duda la Ley 11226, dictada el 3 de octubre de 1923, sobre contralor del comercio de carnes, cuyas disposiciones rigurosas, en modo alguno, pueden compa-

rarse con la Ley de granos, sea en el proyecto del Poder Ejecutivo y menos aun con el despacho de la Comisión de legislación agraria.

La Ley 11226, en efecto, exige una licencia del Ministerio de Agricultura para ejercer cualquier forma de comercio de ganado : no pueden hacer preferencias, en sus transacciones, de personas o lugares, ni prorratear el abastecimiento, ni alterar o fijar injustificadamente el precio; crear monopolios, alterar u ocultar los verdaderos beneficios de su comercio bajo multa hasta de 100.000 pesos, o suspensión o revocación de la licencia. No pueden funcionar mercados de ganado, frigoríficos, mataderos, etc., sin permiso del Ministerio de Agricultura, el cual ajusta sus tarifas, los somete a inspección permanente y debe comunicársele las operaciones que realicen.

Y para que se compruebe hasta qué grado se llega en la fiscalización, agregaré que los inscriptos deben llevar una contabilidad clara y precisa, que revele, totalmente, las operaciones de sus negocios en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo y presentarán las memorias, balances, estadísticas y otros datos de interés público, que la reglamentación establezca. A este efecto, los inscriptos suministrarán los informes que les sean requeridos y facilitarán, en todo lugar, el acceso de los inspectores del Ministerio de Agricultura para examinar y fiscalizar la contabilidad, libros auxiliares, registros, correspondencia, archivo y demás documentos, con excepción de los procedimientos o fórmulas industriales secretas, que pertenezcan al dominio de la inventiva, siendo pasibles de multa hasta de 20.000 pesos moneda nacional si hacen anotaciones falsas, alteran, destruyen o niegan datos.

Las disposiciones de la ley de comercio de carnes son tan completas, categóricas y detalladas que, como decía, en modo alguno pueden compararse con la Ley de granos que se proyecta, y la Confederación del Comercio, la Industria y la Producción ha incurrido en un error evidente al olvidar este valioso antecedente, que no es el único.

Una iniciativa de la Cámara Gremial de Cereales

Terminaré la consideración de esta primera objeción a la Ley de granos, en que niega al Estado el derecho de intervenir o inmiscuirse en estas cuestiones, recordando que fué la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por iniciativa de su presidente, don Adán Traverso, la que requirió del Ministerio de Agricultura, en 1927, la designación de un delegado para que actuara en su seno, iniciativa que fué acogida con todo interés y resuelta favorablemente por el ministro de agricultura, ingeniero Mihura, quien me designó para ocupar ese cargo.

El señor Traverso era un respetable cerealista, profundo conocedor del comercio de granos, de gran prestigio entre todos los gremios afines por su ponderación de juicio y por su bonhomía, llegado el caso, no exenta de energía. En el juego de intereses contrapuestos, en la Cámara Gremial de Cereales, consideraba indispensable la presencia del delegado del Ministerio de Agricultura, quejándose, más de una vez, de ciertos excesos intolerables.

Por otra parte, cuando se ha acudido al Ministerio de Agricultura porque los vendedores no podían entenderse con los compradores, por ejemplo, sobre la graduación de la humedad del maíz; o cuando de algún sector del gremio cerealista se ha solicitado la implantación del precio mínimo para el maíz ¿no se ha arriado la bandera del liberalismo económico, reconociéndose la intervención del Estado, aun para expedientes absurdos como el de la tasa de los precios?

SEGUNDA OBJECCIÓN

Que la Ley de granos no es necesaria; que perturbará en forma profunda el comercio cerealista y hasta será contraproducente para los mismos productores, a quienes se desea proteger ⁽¹⁾.

(1) « Lejos de constituir un motivo de orientación, el proyecto del Poder Ejecutivo lo es de confusión y desconcierto »...

« Si la ley que se proyecta es innecesaria en cuanto concierne a la producción, es en extremo perjudicial en cuanto trata de la comercialización y embarque de los cereales.

« El H. Congreso permitirá el desarrollo normal de las actividades agrícolas con librarlas a los derechos y garantías de la legislación actual, condicionada como está con los sanos principios de la economía, y desechará, como lo pido, este proyecto de Ley de granos, que nadie reclama con fundamento ni seriedad y que, de sancionarse, acarrearía serios perjuicios al país ». (Nota de la Bolsa de Comercio de Rosario, 8 de octubre de 1932).

— « ... el proyecto a estudio, tal cual ha sido redactado, será más bien perjudicial que beneficioso a la economía nacional. » (Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires.)

— Esta institución se cree en la obligación patriótica de dirigirse al Honorable Congreso de la Nación para indicarle, respetuosamente, que el proyecto citado no puede convertirse en ley *porque perturbará en forma profunda el comercio cerealista, y hasta sería contraproducente para los mismos productores a quienes desea proteger*. (Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Nota al presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación, 19 de agosto de 1932.)

Hace 53 años se propuso el contralor de la exportación de cereales

Parece mentira que, en esta época, pudiera cuestionarse la necesidad de una ley de granos en el país.

Hace 53 años, en la presidencia de Avellaneda, 1879, se reconoció la conveniencia de verificar la calidad de los cereales que se exportaban. Nada mejor ilustrará al respecto que la nota del ministro de Hacienda, doctor Victorino de la Plaza, al director de Rentas, de fecha 15 de octubre de 1879. Dice así :

« El incremento que ha tomado en estos últimos tiempos en el país el comercio de exportación de cereales, hace indispensable la atención del Gobierno de la Nación para prestarle toda la cooperación y ventajas que depende de su acción, en el interés de facilitar las transacciones y de propender por los medios a su alcance a que ese comercio se desarrolle y normalice de una manera conveniente. Hasta ahora, la exportación se ha hecho sin otra formalidad, por parte de las aduanas, que la de constatar las cantidades, pero sin determinar ni verificar las clases y calidades de esa materia; y, sin embargo, esa es una de las operaciones principales, tanto para la exactitud de los cálculos y datos estadísticos, cuanto para que el comercio pueda realizar fácil y brevemente sus transacciones desde que tenga la calificación cierta de sus artículos. En consecuencia, y para llevar a cabo este propósito, agregaba el ministro de la Plaza, dispondrá esa Dirección lo conveniente a fin de que, al hacerse el embarque, se verifiquen y clasifiquen por los vistas, expediéndose los certificados que pidieren los interesados. »

Como se advierte, en esa etapa incipiente de nuestra exportación, el propósito del ministro de Hacienda era de « facilitar las transacciones » ; « propender por todos los medios a que el comercio de cereales se desarrolle y formalice de una manera conveniente », y para ello se necesita « determinar las clases y calidades, para que el comercio pueda realizar fácil y brevemente sus transacciones desde que tenga la clasificación cierta de los artículos ». A este efecto organizaba la inspección y clasificación de los embarques y la expedición de los certificados correspondientes.

He aquí compendiados los propósitos de la Ley de granos en lo referente a la exportación. Después de 53 años de haber sido enunciadadas estas ideas, cuando la Argentina es el primer exportador del mundo por el tonelaje de su comercio exterior de cereales y lino, hay todavía quienes desconocen esta necesidad, creyendo que, indiferentemente, debemos continuar colmando sin control las bodegas de los barcos, sin llenar ninguno de los requisitos que ya en 1879 consideraba indispensables el ministro de la Plaza, no por razones fiscales sino técnicas, económicas y comerciales, en defensa de la producción del país.

Frers, el primer ministro de Agricultura

Veinte años después, el primer ministro de Agricultura, doctor Emilio Frers, hacía firmar al presidente Roca, el 8 de mayo de 1899, un decreto organizando en los principales puertos de la República un servicio de inspección de los cereales de exportación.

En el primer considerando resume, magistralmente, los objetivos que se procuran : es conveniente ofrecer al comercio un medio de comprobar las condiciones en que se embarcan los granos destinados a la exportación, a fin de contribuir a la regularización de las transacciones, y de prevenir, en lo posible, las medidas restrictivas que puedan dificultar su introducción en los mercados del exterior, propendiendo a la vez a estimular la buena producción.

La inspección era facultativa lo mismo que el certificado que se expedía ; la inspección la hacía personalmente el perito al costado del buque o a bordo de él, sea que se realizara el embarque a granel o en bolsa por los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, San Nicolás y Villa Constitución.

Todas estas iniciativas, siquiera sea en la forma embrionaria en que se planteaban, demuestran de antiguo la realidad de esta situación, la necesidad de esta intervención del Estado, que viene prestigiada por hombres de gobierno de la talla de de la Plaza y Frers,

Durante el ministerio del doctor Calderón se dictaron las leyes de *warrant* y prenda agraria, y se proyectó la construcción de elevadores.

Proyecto compulsivo del ex ministro Le Breton

En 1923, el presidente Alvear y su ministro Le Breton (Presidencia Alvear 1922-1928. Tomo VIII. Compilación de Mensajes, Leyes, etc., págs. 64 y siguientes), envían al Congreso un completo proyecto de contralor del comercio de los productos de la agricultura. Como quiera que se refiere a todos los productos agrícolas, en realidad, de los términos del mensaje se desprende que tiene en cuenta, principalmente, el comercio de granos, afirmando « que es necesario formar un cuerpo de legislación y organizar un control administrativo que ampare por igual a todos los que intervienen en las distintas operaciones que se producen desde la cosecha hasta el consumo interno o la exportación ».

Agrega después : « Los comerciantes e industriales que controlen estas vastas operaciones deberán hacerlo bajo la vigilancia del Estado, en forma que, sin trabar el libre comercio, impida las combinaciones del monopolio, que pudiesen ser perjudiciales ya al productor, ya al consu-

midor.» « Las grandes casas cerealistas contribuyen con su organización al comercio de nuestros granos, pero debemos cuidar a fin de que, en ningún caso, se excedan en su acción, en perjuicio de los intereses colectivos.»

Todo el proyecto es compulsivo y en nada puede compararse, por sus disposiciones rigurosas, al proyecto de Ley de granos del Poder Ejecutivo o al despacho de la Comisión de legislación agraria. Así, por ejemplo, establece que a los 90 días de haberse establecido los patrones oficiales de los productos agrícolas (para prevenir o reprimir combinaciones, conspiraciones, manipulaciones o cualquier otra operación o acto que pudiera perjudicar a terceros o a los intereses agrícolas del país), no se podrá operar, cotizar, ofrecer, recibir ofertas, comprar o vender para el comercio externo o interprovincial o interno dentro de la jurisdicción nacional, sino bajo la denominación fijada por los patrones oficiales, que constará en un certificado oficial obligatorio, sin cuyo requisito no se puede cargar, embarcar o transportar ningún producto.

Se ocupa del control de los pesos: de la inscripción de los comerciantes e industriales, sugiriéndose para el contralor de los cereales disposiciones iguales a las del contralor del comercio de carnes, que he mencionado con anterioridad. Finalmente, implanta un sistema de depósitos de granos, organizando, además, el contralor de las bolsas, cámaras, mercados a término, etc.

La acción del ex ministro Mihura

El ingeniero Mihura, sucesor de Le Breton en el Ministerio de Agricultura, proyectó y adoptó medidas muy importantes en esta materia. Su proyecto de Ley de Creación del Departamento Nacional de Graneros Públicos, de fecha 7 de septiembre de 1928, procura la misma finalidad de los actuales proyectos de Ley de granos y de elevadores, aun cuando, en algunos puntos, en forma más efectiva y práctica.

Al ex ministro Mihura se debe también la incorporación de un veedor oficial a la Cámara gremial de cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; creación del laboratorio de análisis comercial de granos, que hizo a mi propuesta (Decreto del 14 de agosto de 1928), y la organización del Registro comercial de las cosechas, por decreto de la misma fecha, además de haber transformado en división la antigua sección de genética. Justo es recordar que a Le Breton se debe la iniciación de los estudios de genética en el Ministerio de Agricultura y la creación del Laboratorio de molinería y panificación.

Iniciativas de los ex ministros Beccar Varela y Arias

Además, el ex ministro doctor Beccar Varela nombró una comisión, presidida por el que habla, como director general de laboratorios e investigaciones agrícola-ganaderas, para estudiar la tipificación de nuestros cereales; organizó una inspección facultativa de embarques, habilitó un depósito fiscal para facilitar el warranteo de los granos y estudió la posibilidad de realizar una acción oficial conjunta de contralor sobre los mercados de cereales a término de Buenos Aires, Winnipeg, Chicago, Liverpool, etc. El ex ministro doctor Arias continuó estas gestiones y planeó una encuesta o intervención sobre los mercados a término, fomentando, además, la construcción de elevadores por las cooperativas.

A ambos ministros presenté un proyecto de decreto organizando la inspección de los embarques dentro de los propósitos enunciados por el ministro Frers, pero con carácter obligatorio: proyecto que reproduje con el actual ministro.

Todos estos antecedentes demuestran la existencia de un caudal de ideas, de iniciativas, de realizaciones, de estudios y experiencias, que ponen de manifiesto que no se trata de un terreno virgen, sino que el Estado viene desde hace muchos años, si bien en forma un tanto desarticulada, acumulando todos estos materiales que sirven de fundamento y asegurarán, en el futuro, la efectividad de la Ley de granos.

*Opiniones contradictorias. El enfermo ahora está sano
hace dos años se hallaba moribundo*

La Confederación de la Industria, el Comercio y la Producción, en la nota que he mencionado (que se apoya, según refiere, en la opinión de las sociedades confederadas pertenecientes a los gremios cerealistas, como la Cámara gremial de cereales, la Cámara gremial de molineros, el Mercado de cereales a término y de los representantes de algunos gremios no afiliados), dice que «La necesidad de una ley como la presente, en la cual el Estado asume funciones hasta hoy privadas, no puede fundarse en simples conjeturas, por más populares que ellas sean; debe fundarse en hechos y necesidades debidamente comprobadas, pues de no ser así, se corre el riesgo de enfermar a un enfermo que puede estar sano, que no necesita remedios, o si tiene algún órgano enfermo, el de aplicarle medicinas correspondientes a otra parte del organismo. En definitiva, se ha efectuado tratamiento, sin haber efectuado el previo examen y obligado diagnóstico.»

La Confederación del Comercio, la Industria y la Producción, que así

opinaba en septiembre de 1932, afirmando que el presunto paciente gozaba de buena salud, había sostenido, dos años antes, en agosto de 1930, que estaba poco menos que moribundo, en el memorial presentado al gobierno conjuntamente con la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Cereales, y mientras ahora contradice la ingerencia del Estado, entonces la reclamaba imperiosamente. Véase el siguiente párrafo del capítulo referente a la agricultura :

« Una colonización que propenda a disminuir los costos de producción, el transporte, la tipificación, el depósito y limpieza de los cereales por medio de elevadores de granos, el crédito agrícola, la inspección oficial de los embarques, la regulación de nuestro comercio exterior, son otros tantos factores que no actúan — o adolecen de grandes deficiencias — en nuestro país, con grave daño para la agricultura nacional. La creación de algunos de estos sistemas y el perfeccionamiento de otros — por razones que sería obvio señalar — sólo puede obtenerse con el apoyo del gobierno, y así como la defensa de nuestra producción agrícola debe partir necesariamente de la iniciativa y el esfuerzo de los poderes públicos coordinados con los de las instituciones privadas y de los particulares, para dar principio de ejecución a legítimas aspiraciones, arraigadas en el ánimo de los diversos gremios que concurren a la explotación y comercio de los cereales, en los que ya no se discute la necesidad de adoptar ciertas providencias con la finalidad que se deja señalada. Si tal no se hiciera, mucho debemos temer por el porvenir de nuestra agricultura, ya que han de ser cada vez mayores las contingencias desfavorables a que se halle expuesta, y que en la actualidad sólo se atemperan por circunstancias eventuales, como las que en estos momentos han tonificado las cotizaciones de algunos de nuestros principales productos. »

Consenso general en favor de la Ley de granos. La Bolsa de Cereales

Pero la posición que adoptan todas estas asociaciones mercantiles es tan notoriamente frágil, que terminan por admitir la fiscalización del Estado como una necesidad. Así las Bolsas de Comercio; así la Confederación, que reconoce la conveniencia de la « supervigilancia del Estado » sobre el comercio de granos, que no excluyen, dice, los propios gremios cerealistas; así también lo reconoce un exportador tan importante como don Jacobo Saslasky, ex presidente del Centro de Exportadores, en su carta-renuncia a la comisión de la Ley de granos, de fecha 21 de julio de 1932, cuando dice : « Resumiendo, encuentro justó y necesario y hasta indispensable para los intereses del país, que el Estado controle lo que se recibe y lo que se embarca », expidiéndose, sin em-

bargo, categóricamente, en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

La Bolsa de Cereales merece capítulo aparte. Esta benemérita asociación ha pedido reiteradas veces la ingerencia del Estado, y dice en su nota del 31 de agosto de 1932, dirigida al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación : « Sostenemos, una vez más, la conveniencia de que exista un contralor serio e imparcial en los referidos comercios, que sin contrariar la libertad de su ejercicio, tienda a proteger la producción nacional y al acrecentamiento de su prestigio en los mercados consumidores, e insistimos también sobre la necesidad de la inspección de embarques que esta Bolsa de cereales ha propiciado en múltiples ocasiones, porque, dígame lo que se diga, es un hecho comprobado que el comprador extranjero no tiene la seguridad de recibir el producto argentino en las condiciones de calidad que éste reviste. »

Todas las asociaciones de productores han abogado en favor de la Ley de granos. Lo propio ha hecho el Centro de Ingenieros Agrónomos, debiéndose agregar que, a pesar de toda la intensa propaganda de los interesados, los órganos de la prensa, sin excepción alguna, han sostenido también esta necesidad.

TERCERA OBJECCIÓN

Que la tipificación de los cereales no tiene ninguna ventaja como lo prueba el hecho de que la Argentina y Australia, donde no existe, han logrado en ciertas épocas mejores precios por sus trigos que Canadá y Estados Unidos, donde hay inspección obligatoria y certificado : que, por otra parte, no es posible hacer tipos definidos y estables en la Argentina como sucede en el Canadá por la uniformidad de su ambiente natural.

Decir que la tipificación de los cereales no representa ninguna ventaja para la producción y el comercio, es lo mismo que sostener que es superior el caos al orden y que hay que abolir por inútiles todas las unidades de medida.

La falta de uniformidad de los trigos argentinos Una opinión valiosa. Otros ejemplos

Si hay un país que reclama con urgencia esta reforma, es la Argentina. A todos los antecedentes, que se han mencionado, agrego la opinión del presidente de la Asociación Nacional de la Molinería Francesa, M. Henry Chasles, a quien entrevistó el ingeniero Coni, como delegado de la Confederación del Comercio, la Industria y la Producción, según informe de fecha 10 de diciembre de 1929 publicado en el Boletín de la misma, n° 61, de enero de 1930.

El señor Chasles manifestó que : « El mayor defecto de nuestros trigos residía en la falta de uniformidad de los tipos conocidos por Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosafé, Entre Ríos, que no se ajustan a un *standard* invariable y que llegan a veces mezclados unos con otros. Esto hace que un molinero que haya comprado una vez un trigo Entre Ríos, por ejemplo, repite un nuevo pedido de trigo de ese tipo, y, sin embargo, recibe una mercadería muy distinta a la primera vez. Esto hace que con los trigos argentinos no se sabe la clase de mercadería que va a recibirse hasta que no se la tiene entre manos. »

El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, señor Martínez de Hoz, con motivo de su viaje a Londres, en 1930, escuchó observaciones análogas de los molineros ingleses.

La United Press, por las averiguaciones que practicó, según dice *La Prensa* (2 de abril de 1933), entre los representantes de importadores, molineros, exportadores extranjeros y círculos argentinos, afirma lo siguiente : « Es opinión general que en la Gran Bretaña hay oportunidad para aumentar la actual importación de trigo argentino, no obstante el arancel de 2 chelines por « quarter », *siempre que se logre una mayor purificación de las cosechas.* »

Considero que se pierde lamentablemente el tiempo cuando se trata de demostrar las ventajas tan notorias de la tipificación. Aparte de la dolorosa experiencia de nuestro país, me remito a la nutrida documentación existente en Canadá y Estados Unidos, que sirvió de antecedente a sus leyes de granos, como correctivo a las arbitrariedades sin tasa de que se hacía víctimas a los productores. Yo sé que aun con la ley de granos se filtrarán abusos, pero será en menor medida : habrá un patrón de tipos como punto de referencia y una puerta donde ir a golpear.

Tipificación, dumping y precios

Se agrega, bizarramente, que la Argentina, sin certificado ni tipificación, ha logrado, en ciertas épocas, mejores precios que Canadá o Estados Unidos.

Se trata de hechos aislados sin importancia, episodios que no hacen ley : la dolorosa verdad, como lo saben los mismos que afirman estos extremos, es bien distinta.

Imagínese la urdimbre de factores naturales, económicos y hasta psicológicos, que determinan el curso de los precios. En el segundo semestre del año próximo pasado, por ejemplo, efectivamente, hubo cotizaciones algo superiores para el trigo argentino. Se trata, sin embargo, de paridad de precios o diferencias de algunos centavos. Pero como lo hace constar el ingeniero Coni, cuyo juicio no puede ser sospechado de hosti-

lidad por los exportadores porque se remiten a él con frecuencia, ello se debió al *dumping* del Canadá, que forzó la oferta ante la perspectiva de la gran cosecha que se le venía encima. Y es natural que no valen calidad, tipificación, grados ni certificados, que puedan sostener el precio del trigo, ante este *dumping* de la oferta, que ha hecho famosa a la Argentina, en el mercado internacional, frente a la desesperación de sus rivales para mantener los precios.

Porque, en realidad, lo que niveló los precios no fué la valorización del trigo argentino sino la desvalorización del de Canadá. Es natural que, en este derrumbe de las cotizaciones, vinieran a encontrarse, por lo que se acaba de decir, el Canadá y la Argentina. Iguales causas producen los mismos efectos. El Manitoba, de 10 pesos el quintal, bajó a 7 y, como un rey destronado, fué a confundirse con el pueblo, entre los barussos, rosafés y australianos, y alguno de ellos, al verlo de cerca, comprobó que podría apareársele sin desmedro. Entonces, prodigándose en exceso, sufrió el vejamen de valer algunos centavos menos que los trigos plebeyos del Río de la Plata y Australia.

Véase más adelante cómo en los primeros meses de 1932 se paga el trigo argentino, a pesar de su superior calidad, hasta pesos 1,50 moneda nacional y aun a menor precio por quintal, que el Manitoba.

*El Rosafé y el Bahía Blanca, símbolos de la tipicidad
de los trigos argentinos*

Finalmente, se dice que en Argentina no es posible hacer tipos definidos y estables por la variabilidad de su ambiente natural. Los que tal afirman, dan la espalda a la realidad. Si nuestra región cereal comprende más grados geográficos que el Canadá ¹, lo único que eso demostraría es que debemos formar algunos tipos más de acuerdo a las modalidades del medio. Véase el Rosafé y el Bahía Blanca en los dos extremos de la región triguera.

El Rosefé, que hizo famoso el trigo argentino en Liverpool, antes de que vinieran las variedades de pedigree, representaba es verdad un tipo comercial, pero su fuerza le venía del Barletta, como al Manitoba del Marquis, que no era un producto caprichoso o arbitrario del comercio, sino una expresión fiel del ambiente natural de la tierra y el clima, en Santa Fe y Córdoba, que los genetistas han reconocido después llamán-

¹ En la práctica, según C. B. Piper, los 7 grados básicos, con las diferentes combinaciones, pueden ofrecer, en el Canadá, 165 clasificaciones distintas para el trigo, con un significado perfectamente definido para el comercio, 28 para la avena, 20 para la cebada, 13 para el lino y 9 para el centeno. (RICARDO VIDEA, *El comercio de cereales en Norte América*, pág. 34).

dola la región del Barletta, que daba este trigo semiduro, rico en gluten, de alto valor para la molinería y panificación.

¿Y el tipo Bahía Blanca? Su Lin Calel y su Kanred ¿no son también expresiones genuinas de aquellas tierras sueltas, con clima seco y frío, el mejor trigo argentino de hoy, similar al Manitoba, que se produce, en el otro extremo de la región triguera argentina, en la parte más meridional?

Por otra parte, las variaciones o imperfecciones de la naturaleza las corregirá el elevador.

Standards de los granos argentinos

Cuando en 1931 presidí la Comisión de estudio de granos, en el Ministerio de Agricultura, el Laboratorio de Contralor de Semillas y Análisis Comerciales de la Dirección General de Laboratorios e Investigaciones Agrícola-Ganaderas, preparó varios *standards* tipos de nuestros cereales y lino, aprovechando los numerosos análisis existentes, especialmente las muestras enviadas, a mi pedido, por la Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, que le habían servido para preparar sus tipos, diferenciando la producción y las regiones de acuerdo a las diferentes modalidades de las cosechas obtenidas.

Sin poder detenerme ahora en el detalle de este asunto, diré que llamados a opinar exportadores, molineros, corredores, acopiadores, etc., estuvieron contestes en aprobar los tipos o *standards* estudiados, limitándose algunos a aconsejar la limitación del número.

Y si hubiera que invocar un argumento incontrovertible para probar la posibilidad de tipificar la producción argentina, se hallaría en la actividad que vienen desarrollando desde hace muchos años las Cámaras Gremiales o Arbitrales de cereales.

Allí se reúnen exportadores, corredores, molineros y acopiadores y dos veces, en el año, proceden a la formación de los tipos. Si la producción argentina no pudiera catalogarse en tipos perfectamente diferenciados, ¿podría hacerse este trabajo? ¿Qué corredor no reconoce a simple vista un Brasil, un Buenos Aires, un Bahía Blanca, un Rosafé?

CUARTA OBJECIÓN

Que la Ley de granos no valorizará la producción argentina, y que nuestro sistema de comerciar los cereales es el mejor del mundo.

Normalmente, la calidad mejora el precio. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su memorial, dice : « el mal artículo cierra los mercados, mientras que el bueno los abre y los ensancha ».

La Bolsa de Comercio de Rosario sostiene : « La verdadera defensa del productor está en el interés que despiertan sus productos, interés que será mayor con el mejoramiento de la calidad de éstos y con la celeridad y sagacidad de los factores que concurren a colocarlos en los mercados de consumo. »

La Ley de granos, justamente, valoriza la producción satisfaciendo todos estos extremos. Da las directivas para que la genética obtenga el mejor grano en la chacra : lo limpia y clasifica; lo pesa; facilita su circulación; controla los precios; abre nuevos mercados.

Comercio del trigo de la Argentina y Canadá

Se dice también que el sistema de comerciar nuestros cereales es el mejor del mundo.

Un exportador, en el paroxismo del entusiasmo, decía así : Este país no tiene que envidiar a nadie en cuanto a la organización de la comercialización de sus cosechas y que posee el instrumento de comercialización menos costoso, de mayor adaptación a las circunstancias, de más fácil reajuste a toda situación económica, tanto en los buenos como en los malos tiempos : la prueba mejor es que en este país, en estos últimos años, de las más pésimas condiciones económicas mundiales, ha llegado a realizar hasta el último grano de su cosecha, mientras todos los demás países exportadores no lo han conseguido.

Yo creo que esta opinión es muy respetable, pero si le preguntáramos a un comisionado de granos del Canadá, abriría un juicio muy distinto, ponderándonos su organización.

Refiriéndome, por ejemplo, a la colocación del trigo en la Gran Bretaña, vemos que puede hacerse en tres formas : *a)* por certificado oficial del país de origen sobre calidad (sistema canadiense); *b)* buena calidad término medio de los cargamentos — f. a. q. — (modelo Argentina); *c)* según muestra.

Los exportadores de la Argentina y los cerealistas que se benefician con este sistema en Inglaterra, dicen, como es natural, que es el mejor. Consiste en tomar el promedio de los embarques mensuales, que libremente despacha el exportador, y comparar las partidas remitidas en ese período para bonificar o rebajar según arbitraje por la comisión elegida por la Corn Trade Association.

*El juicio de la Royal Grain Inquiry Commision. El sistema canadiense
es más económico, más rápido, menos molesto*

La Royal Grain Inquiry Commision, nombrada por el gobierno canadiense, cuyo juicio es tan respetable a los exportadores a estar a sus noticiarios, dice en su informe (pág. 44, Ottawa, 1925), que la mayoría de los cargadores en Canadá y Estados Unidos prefieren el certificado porque es más económico, menos molesto y que causa menos demora, y que, en cuanto al arbitraje, en la mayoría de los casos sale perdiendo el cargador. « Por otra parte, el molinero del viejo mundo afirma que el arbitraje le asegura un buen negocio, pero que el primer método (por certificado) es más expedito y más económico también. Esto constituye un argumento grande en favor de los standards uniformes y en su estabilización. De acuerdo a la práctica y a los resultados observados en el sistema de clasificación en las islas Británicas, Holanda y Canadá, este sistema de clasificación es el más seguro y digno de confianza. Los productores de algunos países exportadores de trigo sufren debido al método descuidado o ausencia de método en la clasificación y comercialización de las cosechas de trigo. »

Y hablando de Australia, que ponen de ejemplo aquí a la Argentina, agregan : « Australia tiene un trigo blanco muy limpio, pero su clasificación o graduación no es lo que afirma el molinero adquirente inglés. Esto resulta en detrimento del productor ».

*La London Corn Trade Association y los exportadores son los árbitros
de nuestro comercio de cereales*

Se invoca el testimonio de sir Herbert Robson (ver campo neutral — *La Nación*, 14 de octubre de 1932. — *Venta de cereales argentinos en Europa con certificado oficial de calidad*), según el cual el sistema de negociar el trigo argentino en Europa es mejor que cualquier otro sistema. Ciertamente que el señor Robson no arroja sombras sobre el certificado del Canadá, como otros, porque dice : « El certificado canadiense es, sin la menor duda, un documento apreciado, y la clasificación se hace en el Canadá de una manera muy experta y honesta... »

Pero Robson pondera las conveniencias del molinero europeo para la compra del trigo argentino por el sistema que aquí se usa. No podía ser de otra manera porque sir Herbert es o ha sido presidente de la London Corn Trade Association y es natural que encuentre óptimo un sistema del que tienen ellos la llave, pues fijan los standards, hacen los arbitra-

jes y se expiden sobre descuentos y bonificaciones, sobre la base de los cargamentos que se reciben en los puertos de la Gran Bretaña.

Pero eso no puede ser el bien ni el interés de la Argentina.

*La opinión del presidente de los molineros franceses. Conclusiones
de la encuesta canadiense*

A la opinión de Robson opongo no sólo la ya mencionada de la Comisión de granos del Canadá, sino la del presidente de la Asociación nacional de la molinería francesa, M. Chasles, en la entrevista con el ingeniero Coni, que ya he mencionado.

« Preguntado — dice Coni — M. Chasles sobre cuáles serían los medios para intensificar la importación de nuestros trigos, me contestó que uno de ellos sería el cambio de idioma en que se redactan actualmente los contratos de compraventa de los trigos argentinos, y que es el inglés, debiendo dirimirse todas las divergencias en Liverpool, y de acuerdo con las reglas de la Asociación de granos de la ciudad. En Francia existen muchos molineros, grandes y pequeños, que serían compradores de trigos argentinos si los contratos se redactasen en francés; pero que se resisten a firmar contratos escritos en un idioma que desconocen, debiendo además, dar intervención a un perito extranjero para cualquier desavenencia que pueda surgir entre las partes. »

Y si esto dicen los franceses, ¿qué pensará el productor argentino?

En el resumen de la encuesta canadiense, página 189, segunda conclusión (comisionado Rutherford), se lee : « El sistema canadiense de comerciar y exportar granos es considerado por los importadores y banqueros y, en general, por el comercio como el mejor del mundo, el más expeditivo, el más económico. Los molineros desearían una bonificación cuando los embarques no están de acuerdo al promedio. La f. a. q. sistema de contrato que está en práctica en todos los países menos en Canadá y Estados Unidos, no es tan bueno como el canadiense, demasiada demora, muchas disputas, etc. » (Este es, como se ha visto, el sistema argentino.)

En cuanto al famoso argumento de los stocks, es natural que la Argentina, que malbarata sus cosechas a cualquier precio, no puede tenerlos.

*Testimonios parciales que extravían el juicio público
La verdad de los hechos*

El Centro de exportadores de cereales, en su noticiario cerealista número 9, menciona algunas quejas que se presentaron a la Royal Grain

Inquiry Commision, nombrada por el Gobierno del Canadá, de acuerdo al informe presentado en 1925. Dice así :

« Nos fueron presentadas quejas de diversas clases;

« Que las muestras de granos, sobre las cuales se había hecho la gradación, no habían sido tomadas del vagón, sino substituídas;

« Que cuando la puerta del vagón era trabajosa para abrir, los inspectores no sacaban muestra y pasaban de largo;

« Que sólo se sacaba muestra de la parte superior del vagón, donde el movimiento había acumulado los granos livianos e impurezas;

« Que la mayor parte de las muestras se tomaban de noche y en forma deficiente;

« Que los tomadores de muestras estaban mal remunerados y no se seleccionaban y vigilaban como fuera de desear;

« Es extraño decir que las críticas más severas sobre el Departamento de Inspección provienen de los agricultores de Manitoba, no de los de Saskatchewan y Alberta, que están más lejos;

« El productor parece creer que el Departamento de Inspección procede de un modo perjudicial a sus intereses (pág. 47). »

Pero éstas son opiniones individuales, que carecen de toda trascendencia y no pueden desacreditar el sistema del Canadá.

Veamos lo que dice la Comisión de la encuesta, porque ello es lo que debe hacer fe en este caso.

« Después de oír todas estas objeciones contra el servicio de muestras y clasificación, examinamos cuidadosamente y en modo detallado el sistema vigente en Canadá, Fort William, Porth Arthur y en otros sitios. En Winnipeg, observamos las facilidades para extraer muestras de los carros y observamos también por pormenores del trabajo, la toma de muestras, la identificación, colección, registro, cotejo y empaquetado para ser pasadas después al Departamento de Inspección... »

Y refiriéndose a los tomadores de muestras a los que se hace las críticas mencionadas, dice la Comisión (págs. 50 y 51) : « *No ha llegado a nuestro conocimiento ningún caso en que un inspector o tomador de muestras haya pretendido substituir muestras o cosa semejante. Cualquier falla en las labores o detalles del sistema son debidas completamente a errores del operario. Sin embargo, debe de elogiarse la conducta de esos empleados, cuyo comportamiento y cuya labor ha sido, en una enorme mayoría, digna de gran encomio.* Solamente un número limitado fué despedido por causas del trabajo. *Puede consignarse aquí que es del cuerpo de estos tomadores de muestras que se efectúan promociones en el servicio. El actual inspector y el jefe inspector ayudante fueron antes empleados de esa rama.* »

Pero la Comisión (pág. 47) incluye, en su informe, este párrafo tan expresivo, que puede explicar más de una anomalía : « *a menudo el ser-*

ricio de inspección se relacionó con el comercio de granos y a él se referían como si fuera una única institución ».

A las observaciones enunciadas, se puede agregar muchas otras, que contiene el informe : es natural que haya alguna deficiencia en un sistema tan vasto, que se trate de corregir paulatinamente, ¿cuál sería el capítulo de quejas y reclamaciones si se hiciera en el país una encuesta semejante para conocer las fallas de nuestro sistema actual de comercialización de granos?

La Comisión canadiense dice categóricamente : El productor, molinero, exportador, importador e instituciones financieras deben tener plena confianza en el sistema de clasificación y en la manera en que es realizada. La importancia de la clasificación del grano canadiense no puede ser sobreestimado (pág. 54).

Videla (obra citada, pág. 35), afirma : « La satisfacción por el sistema es tan grande en el Canadá que, en nuestra extensa gira, no hemos escuchado sino expresiones de la más alta apreciación por la clasificación en sí y forma en que se aplica. »

QUINTA OBJECCIÓN

Que lo único efectivo que resultará de la Ley de granos será una mera carga de 2 centavos para el agricultor que, en la práctica, subirá a 5 por quintal, y que la Ley de granos fomentará la burocracia y la intriga y favoritismo político.

Los dos centavos que pagará el agricultor le serán devueltos con creces porque sirven para su propio interés. Los que ahora cuidan tan celosamente los centavos del agricultor, olvidan lo que se les sisa a través del largo proceso.

Los centavos y los pesos que pierde el agricultor porque le inducen a sembrar nuevos trigos genéticos, sin contralor, inapropiados para su región; los centavos, que se desvanecen a través de la larga cadena de intermediarios, cuya función social y económica aprecio siempre que no confisquen la ganancia del productor, cuyo trabajo debe retribuirse, en primer término; los centavos y los pesos que le enajenan al agricultor por clasificación arbitraria de su grano; los centavos que se evaporan por deficiencia de las balanzas; los centavos que se filtran por los boletos a fijar precio, sistema ventajoso en el momento actual de la economía rural argentina, si se aplicara de buena fe; los centavos y los pesos, en fin, que pierde el agricultor porque sus trigos y sus maíces y sus linos no alcanzan la cotización que les corresponde.

La venta del trigo de la actual cosecha es muy significativa a este respecto. Cualquiera de nuestros tipos, el Bahía Blanca, el Rosafé, en

los meses transcurridos en el corriente año, ha obtenido en Liverpool cotizaciones inferiores a los trigos del Canadá, de Estados Unidos y hasta de Australia. La diferencia ha alcanzado a veces hasta 1 peso y 50 centavos por quintal.

No importa que sea la mejor época para la venta de los trigos argentinos, en que no tienen más que la competencia de Australia; no importa que el trigo que vende el Canadá sea siempre inferior al que embarca en el segundo semestre del año después de julio; no importa que la moneda argentina esté desvalorizada más del doble de la del Canadá; no importa « que todos los peritos estén de acuerdo (*La Prensa*, abril 2 de 1933) en que el trigo argentino goza de gran confianza en el Reino Unido por la sencilla razón de que les gusta y necesitan las diversas clases de grano argentino para sus mezclas »; los precios que nos depara el mejor sistema de comercialización del mundo son siempre los peores de acuerdo a la regla invariable, pocas veces contrariada.

Falacias y más falacias. El trigo Bahía Blanca es tan bueno como el Manitoba, pero no se paga lo mismo

El corresponsal del *Deutsche Getreide Zeitung* en Rotterdam (Corn Trade News, 21 de marzo de 1933, reproducido por la *Revista Semanal del Mercado de Cereales a Término*, n° 566, mayo 2 de 1933), ha hecho notar la gran diferencia que existe entre los precios que se obtienen para el trigo del Río de la Plata y el trigo Northern Canadian número 2. Hace pocos días existía una diferencia de florines 1,25 por 220 libras (equivalente a seis chelines y medio por quarter de 480 libras al cambio corriente). Esta gran diferencia ha entorpecido la demanda para los trigos canadienses, aunque se compran todavía pequeñas cantidades en Holanda y Bélgica, como, asimismo, cantidades sumamente reducidas para los molinos de Renania. A pesar de su bajo precio, la demanda por parte del continente para los trigos argentinos es reducida en general, por la razón de que el producto del Río de la Plata no contiene suficiente gluten. Se desea en los círculos cerealistas del continente, que la Argentina haga los esfuerzos necesarios para llegar a producir otros tipos de trigo más fuertes que los actuales.

El Ministerio de Agricultura, siguiendo su regla invariable, no salió en defensa de los trigos argentinos para demostrar la falacia de esa afirmación.

El mismo corresponsal, sin embargo, que afirma así en forma genérica y amplía que los trigos argentinos son flojos, no tienen suficiente gluten y se desea que la Argentina produzca otros tipos de trigo más fuertes que los actuales, había escrito el 26 de enero de 1932, en el mismo dia-

rio, « que, de acuerdo con los análisis practicados en Rotterdam, la calidad de los cargamentos de trigo Bahía Blanca llegados este año, es extremadamente buena, siendo el contenido en gluten del 10 por ciento mayor que el Rosafé y 7 por ciento más que el Brasil. El trigo Bahía Blanca podría comprarse como sustituto del Manitoba» (Corn Trade News).

Esta opinión fué reproducida por el noticiario cerealista número 3 (julio 15 de 1932) del Centro de Exportadores de Cereales con el siguiente título : *El trigo Bahía Blanca es tan bueno como el Manitoba*.

Dicen que este año castigan al Bahía Blanca porque no es de tan óptima calidad. Pero ¿cuál era el tratamiento que obtenía en Liverpool, en el primer trimestre de 1932, es decir, cuando su calidad era superior, tan bueno como el Manitoba, como dicen los exportadores de aquí? En enero, el Manitoba tenía estas diferencias de precios en Liverpool : Manitoba 9,05; Bahía Blanca 7,75; febrero, Manitoba 9,70; Bahía Blanca 8,35; marzo, Manitoba 10 pesos; Bahía Blanca 8,40.

Es decir, 1933-1932 : regular o superior, se paga igual. Consolémonos : ¿cuál sería nuestra desventura si no tuviéramos el mejor sistema de comercialización de cereales del mundo!

La Ley de granos nos informará sobre todas estas anomalías. Los delegados en los principales países productores y exportadores, en las bolsas y mercados, nos tendrán al tanto de las oscilaciones de los precios y el por qué de estas variaciones. Como sucede en el Canadá, en la sede de la Comisión de granos, cualquier agricultor podrá consultar, gratuitamente, las publicaciones apropiadas que registran día a día las cotizaciones de los granos en todos los mercados, por lo menos al último quinquenio.

Ley de granos, burocracia y política

El último argumento sostiene que la Ley de granos puede servir para fines políticos, alimentando una copiosa burocracia. Confieso que es el reparo más serio. La defensa agrícola y la ley de contralor del comercio de carnes son antecedentes poco alentadores.

Pero en el caso de la Ley de granos considero que ese peligro no existe. Estará a cargo de una comisión compuesta de 5 miembros, 3 de los cuales, es decir, la mayoría, representará a los productores y a las bolsas de cereales. Tratándose de una repartición autónoma, en sus manos está evitar el peligro que se señala. Como reza el juramento, en la ley del Canadá (art. 71), los funcionarios deberán comprometer su fidelidad, sinceridad e imparcialidad, lo mejor de su juicio, de su capacidad y de su habilidad.

II

El despacho de la Comisión de legislación agraria

¿Hasta qué punto el despacho de la Comisión de legislación agraria satisface las necesidades y las esperanzas del país?

Es lo que trataremos de estudiar a continuación.

En sus líneas generales sigue el despacho el proyecto del Poder Ejecutivo : lo mejora en dos puntos importantes : ha confiado la Ley de granos a una comisión especial, con su presidente, a cambio de la que proponía el Poder Ejecutivo presidida por el ministro de Agricultura, lo que hubiera sido un claro error, como lo hice constar en mi nota de fecha 2 de diciembre de 1922, que dirigí a la Comisión de legislación agraria como presidente del Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos, y, en segundo lugar, desglosando de la competencia de la Comisión de granos todo el capítulo sobre fitotecnia, que, como es lógico, y también lo sostuve en la mencionada presentación, corresponde al Ministerio de Agricultura. (Léase más adelante.)

La Ley de granos se ocupa del comercio, sin defecto de las afinidades que debe tener con los servicios técnicos de fomento de la producción.

El despacho contiene los siguientes capítulos : Comisión nacional de granos ; Facultades y deberes de la comisión ; Fijación de tipos y zonas ; Certificados ; Comercio de granos ; Fomento de la genética ; Recursos de la comisión ; Disposiciones especiales.

Error fundamental. Los elevadores y la Ley de granos forman una unidad intangible

Antes de expresar las conclusiones generales, que me sugiere el despacho, debo fijar un punto de vista que considero fundamental.

La Comisión, de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo, ha aceptado una organización dual : por un lado, la Dirección de elevadores nacionales, como entidad autónoma, compuesta de 7 miembros, nombrados con acuerdo del Senado ; y por el otro, la Comisión nacional de granos, también autónoma, integrada por 5 miembros designados en las condiciones de la anterior.

El miembro informante de la Comisión de legislación agraria, diputado Duhau, al considerarse la Ley de elevadores, decía :

« Algunas de las facultades de la Dirección de elevadores nacionales, se otorgan a título precario hasta tanto el Honorable Congreso dicte la

Ley de granos. Ha habido que hacerlo ; ya que de otra manera la Ley hubiera quedado trunca. La Comisión ha creído conveniente separar la administración de los elevadores de la Comisión que crea la Ley de granos, que se refiere al control del comercio de granos, dándole así a esta última mayor independencia para dirimir las cuestiones, que puedan suscitarse entre la administración de elevadores y los productores y comerciantes de granos. La ímproba labor que representa cada una de las divisiones, que se han adoptado, justifica plenamente su separación, ya que además, se logra establecer un verdadero control sobre la Administración de elevadores que ha de contribuir seguramente a aumentar su eficiencia. » (*Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, mayo 17 de 1933, n° 6, pág. 160.)

Considero errónea esta independencia, que traerá grave daño al nuevo estado de cosas.

La Ley de granos del Canadá entrega a la Comisión todo lo que atañe a elevadores, como no puede menos de suceder, porque el elevador es el órgano de la Ley de granos. La Ley de granos habla y hace por el elevador, que es su boca y su brazo.

Así, interviene en los planos tipos para la construcción o reconstrucción de elevadores, que ella debe aprobar para que la obra se realice : fija las tarifas, interviene en el seguro, compensaciones, descuentos, pérdidas, clasificaciones, inspección, registro, visación de contratos sobre almacenamientos según grados, etc. La tercera parte del articulado de la Ley de granos del Canadá, se refiere justamente al régimen de los elevadores y a sus relaciones con los servicios que le son inherentes.

El proyecto del ex ministro Le Breton sobre control de los productos de la agricultura, que he citado, de fecha 28 de julio de 1923, establece en el capítulo V que los depósitos de granos estarán bajo el control de la misma comisión que forma los standards. El artículo 28 dice :

« La Comisión de control del comercio de productos agrícolas, tendrá a su cargo la clasificación y fiscalización de las operaciones de todos los depósitos y elevadores públicos, particulares u oficiales, existentes o que se construyan en el futuro. Se entenderá por depósito elevador público todos los elevadores terminales, los semiterminales, los elevadores de campaña, los elevadores de selección o enración de productos dañados o perjudicados, los galpones o depósitos públicos de granos, los tinglados, las chatas marítimas de elevadores de depósitos, que se construyan en los puertos y sobre las líneas del ferrocarril, sean todos ellos oficiales o de propiedad privada. »

Por su parte, el ex ministro Mihura, en su proyecto del Departamento Nacional de Graneros Públicos, entrega a la misma comisión la construcción y régimen de los elevadores y le confiere las atribuciones correspondientes a la Comisión de granos.

El diputado doctor Repetto ha percibido agudamente esta situación cuando dice en su discurso de la Ley de elevadores :

« A mí me parece que lo que corresponde es una organización que, descripta en forma esquemática, deberá constar de los siguientes resortes : los elevadores de campaña son administrados y dirigidos por las cooperativas agrícolas locales, con carácter de servicio público. Los elevadores terminales, en cuanto a la parte mecánica y comercial, son puestos también en manos de una comisión, en la que tengan representación si no preponderante por lo menos importante, los productores. Y esa comisión nacional de superintendencia es la que tendría a su cargo la aplicación de la Ley de granos. » (*Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, N° 7, mayo 18 de 1933.)

Finalmente, la Comisión de legislación agraria entrega a la Comisión de carnes, todo lo referente al frigorífico : el contralor de las existentes como la creación de nuevas usinas ¿ por qué no ha aplicado a los granos el mismo régimen centralista ? ¿ Porque los frigoríficos existen y los elevadores hay que hacerlos ?

Para el caso es lo mismo, porque el artículo 11 del proyecto dice que « los elevadores deberán ser entregados con maquinarias y en estado de funcionamiento inmediato, debiendo durante el primer año las firmas constructoras encargarse, a su costa, de la dirección técnica de su funcionamiento » (1).

El cereal fluye a manera de corriente continua

He aquí, pues, el problema. Como se ha dicho con razón, en conexión con mercados y productores organizados, se ha desarrollado paulatinamente un sistema de nivelación o clasificación de los granos, de manera de facilitar el comercio nacional y el internacional. Las propiedades corrientes del cereal se han aprovechado de esa ventaja y en todas partes, a lo largo de la línea desde el productor al consumidor, el cereal fluye a manera de corriente continua.

La bondad de un sistema de tráfico radica en la supresión de interrupciones, que garantice la rapidez del movimiento. Esa es la primera condición que debe satisfacer la Ley de granos. Además, la economía del elevador resulta de la velocidad de giro.

Entregado a dos jurisdicciones distintas (que serán 3, Dirección General de FF. CC.) se llegará a estos resultados : conflictos de atribuciones, pesadez en el trámite, recargo de los servicios.

(1) La Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó el despacho de la minoría, que establece una sola comisión para los elevadores y la Ley de Granos. Está a consideración del Honorable Senado.

Se trata de dos entidades autónomas. A la de granos se le acuerda el derecho de contralor sobre la de elevadores, lo que no obsta a que su presidente perciba menos sueldo que el de los Depósitos nacionales. Mientras en la de granos dice que es autónoma, dependiente del Ministerio de Agricultura, no reza así para los elevadores en cuya ley, para mayor confusión, se incorporan disposiciones que netamente corresponden a la de granos, como el artículo 22.

La Comisión de elevadores deberá tener un nutrido cuerpo de inspectores ⁽¹⁾ y otro tanto la de granos, ¿por qué esta duplicidad de servicios? Imagínese las luchas, controversias y conflictos, tan propios de la burocracia y de nuestra idiosincrasia criolla, que generará esta superposición de funciones.

Pero hay más : la Comisión de legislación agraria, por el artículo 19 del proyecto, autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar a las casas constructoras la administración y explotación de la red de elevadores como servicio público. En este caso, junto a la red de elevadores funcionará la red de los empleados, diferenciada en tres instancias : la red de la Empresa ; la red de la Dirección nacional de elevadores y la red de la Comisión de granos, entre cuya tupida malla necesitarán los granos el hilo de Ariadna para llegar a destino por el intrincado laberinto.

¿Quién pagará los empleados de la empresa? ¿Quién los de la Dirección de elevadores? Junto con el servicio de los títulos y otras expensas los costearán las tarifas, que es decir, el productor. ¿Y pueden las tarifas, en estas condiciones, satisfacer el requisito de estricta economía a que se ha referido acertadamente el diputado Cárcano para justificar la implatación y asegurar el porvenir de este nuevo instrumento de la economía agraria argentina?

Por ello, por celeridad, que es decir la vida misma de la Ley de granos : por razones de unidad y de economía, ambos regímenes deben refundirse en uno solo.

Esta unidad intangible de los elevadores y la Ley de granos se pone de manifiesto en el debate sobre los elevadores en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en que hay que dejar en suspenso algunas

(1) El diputado señor Palacio, miembro de la Comisión de legislación agraria, en el debate sobre los elevadores dice : « La administración de la red de elevadores de granos implicará la de una enorme empresa dueña de un cuantioso capital, extendida en la vasta zona agrícola de nuestro país, con un sinnúmero de empleados a su servicio ; desde los altos funcionarios encargados de su administración, hasta los técnicos encargados del funcionamiento de sus máquinas. Implicará más, señor presidente : será la de una enorme empresa responsable de la clasificación, limpieza, desecación y almacenamiento de nuestra producción, de su transporte, a través de todo nuestro territorio hasta los puertos de embarque, de su seguro y hasta el instrumento de crédito que, bajo la forma de warrant, se ha establecido por la Ley. » (*Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, N° 9, mayo 31 de 1933, pág. 267.)

cláusulas o hay que referirse constantemente a la Ley porque se trata de entidades inseparables.

Por otra parte, una ley de granos, perfectamente articulada, asegura, con toda eficiencia, el contralor a que se refiere el diputado Duhau.

Atribuciones y deberes de la Comisión

Pasaré en revista, brevemente, los otros capítulos del despacho.

Las facultades y deberes de la Comisión de granos, que ya venían disminuidos en el proyecto del Poder Ejecutivo en relación a lo que debe ser una completa ley de granos, han sido aún más cercenados por la Comisión.

Una completa ley de granos comprende : la clasificación del grano; el peso del grano ⁽¹⁾; el transporte del grano; el precio del grano. De ahí que debe comprender el contralor de los elevadores; el contralor de las balanzas; el contralor de los vagones y camiones; el contralor de los mercados, cámaras, bolsas, etc.

Las atribuciones de la Comisión de granos deben ampliarse en este sentido. A los tropiezos, interrupciones y fracasos, que generarán los elevadores como entidad aparte, se suma la omisión referente al transporte. Los inspectores y extractores de muestras deben trabajar constantemente en los vagones. En la época de gran actividad, pasan 2000 por día en Winnipeg. La provisión y movimiento de vagones de ser atendida celosamente para no interrumpir el caudal continuo, que lleva el grano de la chacra al mercado interno o a la exportación. Sin defecto de lo que compete a la Dirección General de Ferrocarriles, la Comisión de granos debe intervenir en todo lo referente al movimiento de los mismos. No basta con lo que establece el inciso c del artículo 4°.

Como prueba de esta necesidad, véase cómo se ocupa de los vagones el reglamento de las Cámaras Gremiales y Arbitrales de Cereales.

La Comisión de Legislación Agraria ha suprimido algunas de las atribuciones que confería a la Junta de Granos, el Poder Ejecutivo, y que convendría mantener. Así, por ejemplo, la de designar tribunales de apelación, que entiendan en las divergencias sobre el cumplimiento de reglamentos y contratos relativos a la compraventa de granos. Así también con la que facultaba, en el proyecto del Poder Ejecutivo, a la comisión, para indicar el texto de los distintos formularios uniformes de contratos de compraventa de granos, a los cuales deberán ajustarse todas las transacciones, cláusula previsor, que existe también en la ley del Canadá.

(1) La División de Contralor del Comercio de Carnes ha solicitado de la Comisión Nacional de Carnes, recientemente, la inspección de balanzas y básculas para asegurar la fidelidad de los pesos. Es ya una costumbre nacional desentenderse de este punto sin advertir cómo repercute en el precio de la mercadería.

Fijación de tipos y zonas

Considero necesario que a los grados estatutarios, por así decir, de una mayor estabilidad, se agreguen grados comerciales y especiales, que habrá que computar sobre todo en los primeros tiempos, para tomar en cuenta las variaciones de los tipos, de acuerdo a los cambios climatéricos, etc. La comisión, a mi juicio, deberá comenzar a fijar los tipos en forma más o menos análoga a lo que ahora hacen las Cámaras gremiales o arbitrales. Se admitirán las tolerancias que correspondan. La experiencia inventoriada en largos años de trabajo de estas Cámaras debe ser aprovechada. El mal no está propiamente en la calidad de los tipos que forma la Cámara Gremial de Cereales, sino en que se usan, casi exclusivamente, para las entregas en el mercado a término, sin que se ciña a ellos la exportación y, en grado mínimo, el consumo. Además de las muestras, que se indica, para formar los tipos, convendrá agregar las que correspondan a transacciones realizadas, con firmas de comprador y vendedor, que son las más fehacientes.

Mediante los grados estatutarios, los comerciales y los especiales será posible clasificar toda la producción del país de cereales y lino, y, como establece el artículo 8° del despacho, estos tipos y grados serán los que se cotizarán en las bolsas y mercados de cereales y a ellos deberán referirse las cotizaciones oficiales de pizarra y todas las transacciones de granos.

Actualmente los tipos que forman las Cámaras gremiales y arbitrales son los que se cotizan en los precios oficiales de pizarra. La innovación del artículo 8°, de gran importancia, es que a los tipos formados por la Comisión de Granos *deberán referirse todas las transacciones de granos*. De esta manera, por lo que hacía constar arriba, dejarán de ser meros fantasmas en el comercio de cereales.

El talón de Aquiles de la Ley de granos

El artículo 8° de este capítulo de tipos y zonas contiene un agregado importantísimo, que no se comprende por qué se ha incorporado a esta parte de la ley cuando corresponde, en todo caso, claramente, al capítulo del comercio exterior. Dice así : « las mezclas sólo podrán ser exportadas con la calificación de tales ».

Hay a este propósito de las mezclas una verdadera confusión. A una pregunta del diputado señor Noble (J. A.), *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, 31 de mayo de 1934, pág. 275), contesta el diputado señor Duhau :

— « Los beneficios de las mezclas son beneficios que existen cuando en un mercado determinado existe la posibilidad de mezclar. Pero cuando no existe esa posibilidad porque la ley no lo permite... »

Entonces interrumpe el diputado señor Palacio, miembro también de la Comisión de Legislación Agraria, que ha despachado estas leyes, y dice :

— « La Ley de granos lo va a prohibir. »

Y agrega el señor Dubau : — « ... y entonces la mezcla no tiene ninguna influencia ».

A lo que contesta el diputado señor Noble (J. A.) : — « Pero el señor diputado se está refiriendo a una ley que todavía la Cámara no ha sancionando. Cuando se discuta la Ley de granos, ya veremos si eso es conveniente. »

Como se habrá advertido, se afirma que la Ley de granos va a prohibir, no permitirá las mezclas, y resulta del despacho que he leído (art. 8°), que no sólo no las prohíbe, sino que hasta autoriza su exportación, con tal que se haga con la denominación de tales.

Es realmente sensible que la Comisión de Legislación Agraria no se haya preocupado de las mezclas en ninguna parte del despacho con excepción de ésta, y sea, justamente, para permitir su exportación. El error de los diputados que sostuvieron que la Ley de granos prohibía las mezclas, en el despacho proyectado, se debe posiblemente a la circunstancia de que se discutía la ley de elevadores, los cuales, funcionando como servicio público, no pueden mezclar. Pero el mismo despacho (art. 18), considera el caso de los elevadores existentes, que pueden o no acogerse a la ley. En el último supuesto, funcionarán como privados y, en tales condiciones, podrán libremente *maquinear* los granos que reciben y les pertenecen.

Pero hay más aún. La Comisión ha suprimido, prolijamente, todas las disposiciones del proyecto del Poder Ejecutivo que trataban de cuidar este punto tan importante de la ley. Así, por ejemplo, el artículo 21 del proyecto del Poder Ejecutivo autorizaba a la Comisión a impedir la salida de un cargamento cuando se hubieran verificado mezclas prohibidas o no se hubiera cumplido con la Ley de granos o se quisiera hacer comprobaciones relativas a su cumplimiento. El inciso *g*, del artículo 22 (proyecto del Poder Ejecutivo), prohibía la exportación de mezclas que pudieran desmejorar la calidad de los granos tipificados o de cereales u otros productos aislados, que puedan servir para realizar esas mezclas. (Ver también inc. *e*, art. 10.)

No hay en todo el despacho, por una omisión incomprensible, ninguna cláusula que considere este punto. Hay que ir a buscarla al despacho de la Comisión de legislación agraria sobre elevadores de granos, cuyo artículo 22 dice : « Queda autorizado el Poder Ejecutivo para prohibir la

exportación de granos que no reúnan las características exigidas por las leyes y reglamentos a que se refiere la presente ley y aplicados en los elevadores oficiales. »

Este artículo ha sido textualmente tomado del proyecto sobre elevadores del Poder Ejecutivo (art. 16), que, a su vez, parece haberse inspirado en el proyecto de graneros del ex ministro Mihura, cuyo artículo 11, dice : « Queda autorizado el Poder Ejecutivo para prohibir la exportación de granos que no reúnan las características exigidas por el reglamento de clasificación de granos vigente. »

Se explica que Mihura lo hubiera incluido porque él entregaba a la misma mano los elevadores y la Ley de granos; pero habiéndose separado, es natural que nada tiene que hacer en la de elevadores, y debe incluirse en la Ley de granos, en el capítulo referente al comercio de exportación.

Y este punto hay que legislarlo muy celosamente porque a poco que nos descuidemos, la ley amparará al comercio actual, si permite libremente la exportación de mezclas, siempre que se designen como tales.

Así sucederá si se interpreta esta cláusula liberalmente.

El problema de las mezclas

Ante todo es menester fijar las ideas respecto a lo que deba entenderse por mezclas. Los que quieren tener las manos libres en esta materia, dicen que todos los trigos, que se venden, son en realidad mezclas. (Sin defecto de que así sea, hay que aclarar que tienen una composición reglamentada, dentro de ciertos límites, precisándose las variedades más o menos dominantes y proporciones adecuadas.) Otras personas contemplan con criterio benigno las cuestión mezclas porque parecen referirse, exclusivamente, a la posibilidad de mezclar dos trigos de peso hectolítrico distinto.

El problema de las mezclas, en su genuina significación, presenta dos casos generales :

1° La operación de la mezcla de grados distintos, estatutarios o comerciales, o sin grado o desestimados, etc., con el objeto de obtener una mayor cantidad de uno o más grados determinados de los que establece la Ley de granos. (Por ejemplo : mezclamos un Hard con Manitoba 1 y 2 para obtener más proporción del n° 1; el Hard y el óptimo de calidad del n° 1, han mejorado al Northern 2, convirtiéndolo en n° 1);

2° Las mezclas resultantes de trigos de distintas variedades más o menos afines, en proporciones distintas, de modo tal que no puedan encuadrarse dentro de los tipos o grados establecidos por la ley. (La Ley

de granos del Canadá, por ejemplo, establece seis tipos correspondientes a estos trigos mezclados.)

Por ello considero que la Comisión de Legislación, al establecer y definir los tipos, en la parte respectiva de la ley, debe de precisar también lo que se entiende por trigos mezclados, los cuales caen fuera de los grados reglamentarios.

En las mezclas hay un problema de calidad y otro de provecho. Por eso tienen panegiristas entusiastas y detractores enérgicos.

En el Canadá, se concretaba la cuestión en estos términos : « si el grano, que se exporta es rebajado en calidad, esto debe deprimir la reputación del trigo canadiense en los mercados inglés y extranjeros. El molinero pagará menos por él porque le será menos valioso. El grano canadiense se venderá por lo tanto a menor precio en los mercados ingleses de lo que se debería. Pero los precios obtenidos en el mercado de Liverpool se reflejan e influncian en los precios que se hacen en la bolsa de Winnipeg. Los exportadores canadienses no pueden ofrecer por el trigo canadiense lo que no pueden ellos obtener para él al otro lado del mar. Esto deprime el precio del grano en Winnipeg y esa depresión necesariamente refluye en sus efectos hasta tocar al productor, por el menor precio a que se debe vender su grano sea en Winnipeg o en el elevador terminal. De acuerdo con esta línea de razonamiento, la mezcla de granos produce un doble daño : lastima la reputación del grano canadiense en el exterior y reduce el precio que el chacarero recibe por él, en su chacra ». (*Report of the Royal Grain Inquiry Commission, Canadá, Ottawa. 1925, pág. 83.*)

Todo este comentario se aplica magistralmente al comercio actual del trigo argentino, por las mezclas libres, que hace la exportación, y que perdurará, echando por el suelo toda la Ley de granos, si se mantiene la cláusula falaz del despacho : « las mezclas solo podrán exportarse con la calificación de tales », cláusula que podría tener alguna caución si se implantara el certificado obligatorio, lo que, como se sabe, no hace el despacho de la Comisión de Legislación Agraria.

Las directivas a seguir, a mi juicio, son las siguientes : la Comisión de Granos formará los tipos o *standards* para la exportación, la que se efectuará con sujeción a ellos.

Admitiendo que en los elevadores privados pueda mezclarse, lo que en ciertos casos (Cooperativas) podrá beneficiar al productor, habría que distinguir el trigo natural del *maquineado*, sometiendo a celosa inspección los elevadores en que se realicen estas operaciones. El día que exista el certificado obligatorio será más fácil hallar la solución adecuada a este asunto.

En síntesis :

El artículo 22 del despacho sobre elevadores debe transferirse al de la

Ley de granos, suprimiéndose la peligrosa cláusula sobre mezclas de exportación. La Comisión de granos, que aplica la ley, es la indicada para prohibir la exportación cuando no se ciña a las leyes y reglamentos; la ingerencia del Poder Ejecutivo no es conveniente.

Certificados

Casi todo el articulado del despacho sobre certificados es redundante, porque está contenido en la ley 9643 sobre warrant.

La comisión ha sido impresionada, evidentemente, por la campaña que se ha hecho en contra de los certificados para la exportación. Considero que no conviene acumular todos los obstáculos, desde el principio, y por ello estimo oportuno que no se implante de inmediato el certificado; pero así como dice el artículo 13 que la comisión podrá establecer, cuando lo crea conveniente, la obligatoriedad del certificado, para el comercio interno, debiera decir lo propio para la exportación.

Una vez que el sistema marche, hay que llegar a la obligatoriedad del certificado para adentro y afuera. Porque sería absurdo que la genética produjera trigos puros, de acuerdo a las previsiones del despacho de la Comisión de legislación agraria y que el elevador los tipificara celosamente, para que después fuera todo eso a parar, en montón, a las bodegas de los barcos.

En el juicio que transmitió la United Press, que he citado, anteriormente, se dice que la opinión general en Gran Bretaña es que, a pesar de todo, *hay oportunidad de aumentar la importación de trigo argentino siempre que se logre una mayor purificación de las cosechas.*

La comisión especial designada por el Ministerio de Agricultura para proyectar la Ley de granos, propuso el certificado obligatorio. Fuí designado para integrar esa comisión, pero no llegué a actuar porque su trabajo coincidió con mi retiro del Ministerio.

COMERCIO DE GRANOS

Inscripción de cerealistas

En el capítulo sobre comercio de granos hay que incorporar disposiciones que se incluyen en los otros y corresponden a éste.

No se alcanza a comprender por qué debe inscribirse solamente a los exportadores (Art. 15) y no hacer lo propio con todas las personas que comercian con los granos, corredores, molineros acopiadores, comisionistas. ¿Por qué se aplica distinto criterio al del comercio de carnes?

Esta inscripción obligatoria, licencia o permiso, existe también para todos los gremios cerealistas afines en el Canadá (donde se renueva anualmente, pudiendo ser suspendida o revocada), y si la comisión ejercerá superintendencia sobre cámaras gremiales, bolsas y mercados, no se alcanza la razón por la que sólo registre a los exportadores. Como en la ley 11226, hay que agregar la inspección y contralor de libros, balances, etc. Si estas disposiciones protegen al fuerte y rico gremio de los ganaderos, amparados por la poderosa influencia de la Sociedad Rural Argentina, parece natural que sean doblemente necesarias en favor de los pobres y humildes colonos. Hay que ponerlo en la ley: las reglamentaciones no podrán ir más allá de lo que ella autorice o faculte.

El despacho establece también que los puestos se llenarán por concurso, dándose la preferencia, en igualdad de condiciones, a los egresados de los institutos y escuelas de agricultura. Es una disposición importante, en que han fallado nuestras pocas leyes agrarias. (Defensa Agrícola, tierras, crédito, colonización, contralor del comercio de carnes.) Se necesita la ley y su efectividad por órgano del personal técnico capacitado. Basta de burocracias ineptas y de clientelas electorales.

*Error inicial. Todo el sistema fallará por su base
La fidelidad de la muestra es la llave del sistema*

El error fundamental del despacho, que ya lo tenía el proyecto del Poder Ejecutivo, es el que se refiere al envío de muestras por los exportadores. Todo el sistema fallará por su base.

En el Canadá, donde existe el régimen mejor organizado, todo lo que se refiere a las muestras es de capital importancia, porque sirve para hacer los *standards*, para extender los certificados, para efectuar la clasificación, para acreditar y defender el trigo del Canadá.

La Confederación dice que ningún exportador podrá responder por las operaciones hechas por su personal. Y cosa extraordinaria, admite que no es el exportador quien debe entregar las muestras, sino la comisión tomarlas ella misma en el curso del embarque. Esta es la buena doctrina. La comisión de granos no es un archivo de muestras. Toda su misión radica en una competente y honrada inspección.

He estudiado de cerca este asunto mientras fuí director general de Laboratorios e Investigaciones Agrícola-Ganaderas. Ningún cerealista de los que consulté opinó que no podía hacerse una buena inspección de embarques. Durante la guerra, los aliados tenían aquí una comisión de compras que efectuaba la inspección de todos los cargamentos, que se despachaban.

Hay que tomar las muestras al costado del vapor o a bordo, en donde

se encuentra el empleado del exportador, que realiza este mismo trabajo. Mejor aún, el inspector de la comisión de granos tomará una parte de esta misma muestra, que se va formando y extrayendo delante de sus ojos, y que debe responder a los tipos de exportación autorizados, lo que se irá comprobando a medida que progrese el embarque.

Este trabajo se hará en todos los puertos de exportación. La financiación de la Ley de granos permite atender esta función, que es, actualmente, la más importante a cargo de la Ley de granos.

Exportamos el 75 por ciento de nuestros cereales y lino. El contralor del comercio interno deberá demorarse, condicionándolo con la construcción de la red de elevadores; el de exportación, en cambio, puede hacerse de inmediato, y es el que más urge.

Pero hay que entregar a la comisión la extracción de las muestras. Cuando Frers se ocupó de la inspección facultativa de los embarques, hace 30 años, a que he aludido, ya especificaba que la toma de muestras se haría al costado del vapor o a bordo. Con cuánta mayor razón debemos hacerlo ahora por imperio de la Ley de granos.

Cámaras, Bolsas y Mercados

La ley establece una superintendencia de la comisión sobre todas las entidades que intervengan, directa o indirectamente, en el comercio de granos, interno o externo, las cuales ajustarán sus actividades a lo dispuesto en la ley y reglamentaciones correspondientes. Considero muy útil esta articulación porque las Cámaras gremiales o arbitrales, por ejemplo, en que están representados los productores y todos los gremios cerealistas, serán como la primera instancia de la comisión de granos, reglamentadas adecuadamente. (Ver conclusión 8ª, en la nota, que figura a continuación, que dirigí a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como presidente del Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos.)

El mercado a término de cereales no debe ser una sociedad anónima

Las ventajas de los mercados a término de cereales son notorias para regular los precios, cuando funcionan normalmente. La fiscalización del Estado es admitida por entidades como la Confederación del Comercio, la Industria y la Producción. Uno de los puntos más controvertidos es el que se refiere al libre acceso de los que no son accionistas. Esta disposición del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 17 de marzo, es la que ha levantado más resistencias. La Confederación dice que no se debe permitir operar directamente a personas que puedan no tener la solven-

cia moral ni material del socio. Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo establece que el mercado a término y los funcionarios públicos que lo controlen de acuerdo con el mismo, determinarán las garantías que deban exigirse a las personas no accionistas para el registro y fiel cumplimiento de sus operaciones y las cantidades mínimas de cada contrato (Art. 3°).

Considero que el modo de resolver de raíz todos estos inconvenientes, es el de hacer perder a los mercados a término de cereales su condición de sociedad anónima. Constituir una asociación de productores y cerealistas, cuyos socios, que ya no serán accionistas, podrán operar libremente en el mercado.

La transformación del mercado a término puede hacerse sin quebranto para sus accionistas, teniendo en cuenta el capital de que dispone.

Fitotecnia. Hay que dictar la Ley de semillas

Finalmente, el capítulo sobre fitotecnia deberá incluirse en la Ley de semillas, que hay que dictar en el país para que los agricultores no continúen como hasta ahora en el más absoluto desamparo, víctimas de comerciantes inescrupulosos, que le venden, impunemente, semillas muertas o espúreas. Puede tenerse una idea de esta situación por el siguiente hecho : siendo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, dispuse la compra de una semilla. Efectuado el análisis en nuestro laboratorio, resultó el 100×100 de semillas muertas. Si la casa vendedora de la Capital tenía la audacia de enviar a una Facultad de Agronomía semillas inertes, sin poder germinativo ¿qué no sería capaz de hacer con los pobres colonos? Por eso hay que dictar la Ley de semillas, que ponga coto a estos abusos, por no decir delitos.

A los efectos de la Ley de granos, bastaría un artículo que dijera que no puede difundirse una nueva variedad sin previa aprobación de la junta respectiva, como reza el artículo 13 del proyecto del Poder Ejecutivo.

En este capítulo de la fitotecnia todo está por hacerse. Carecemos de un instituto central de la importancia de los que existen en Alemania, Suecia, Rusia y el Uruguay. Los diputados Loyarte, Cárcano y Bustillo, han presentado un proyecto en este sentido. Cuando ocupé el decanato de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, traté de hacer algo a este respecto : creé el Instituto de genética ; traje a los profesores Baur y Azzi ; hice el edificio y el campo de investigación ; envié becados a Alemania y Estados Unidos.

*Palabras y hechos. Hay que crear red completa
de estaciones experimentales*

El despacho de la Comisión de legislación agraria detalla, primorosamente, los requisitos que habrá que cumplir, en el futuro, para difundir una nueva variedad de granos. Plan metódico de ensayos comparativos de adaptación, resistencia a las enfermedades, etc., para toda la República; inscripción de criaderos, semilleros, etc., que expendan semillas, aprobadas y fiscalizadas por el Ministerio de Agricultura, bajo su contralor, a cuyo efecto se deberán hacer, previamente, ensayos y comprobaciones, en las distintas regiones del país, mediante las chacras experimentales, escuelas u otros establecimientos particulares, etc. Finalmente, el Ministerio de Agricultura confeccionará un mapa de la distribución de las variedades existentes y el porcentaje del área sembrada con cada variedad y aconsejará a los agricultores lo que deban sembrar en cada región.

Todo esto será letra muerta si no se comienza por crear la red completa de estaciones experimentales, que el país pide a gritos en nombre de los 2.797.113 kilómetros cuadrados de su superficie, con la máxima variedad de climas y suelos. He asistido a dos conferencias del trigo, en Coronel Vidal y Córdoba, celebradas hace poco más de tres años, y había que ver cómo los genetistas procedían a puro palpito para expedirse sobre el comportamiento de las variedades en las distintas regiones trigueras. En el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el sur; en el sur y este de Córdoba, regiones trigueras típicas, no tiene el Ministerio de Agricultura, una sola estación de genética. Lo propio digo de Santa Fe y Entre Ríos.

A ello atribuyo que en la Conferencia del trigo de Córdoba, el genetista máximo del Ministerio de Agricultura, presentó un único estudio sobre la materia, referente a ensayos de variedades de trigo en Stroeder (!). Había ido a experimentar en el extremo sur de Buenos Aires, en pleno dominio de la oveja, en un establecimiento particular.

Pura ficción. Genética y ecología. Las actas Hatch y Adam

Por tanteos, a puro palpito, quería hacerse en la expresada conferencia, un mapa de variedades de trigo de pedigree para cada una de las regiones de Córdoba. Me opuse sosteniendo que no era posible expedirse con fundamento sin el previo estudio experimental, punto de vista que fué aceptado por la asamblea, a pesar de la resistencia de los comerciantes de semillas.

Ello no obstante, el Ministerio de Agricultura, en almanaques, actas y folletos, da la receta de variedades de pedigree para las diferentes regiones del país, sin que su juicio o dictamen se funde en estudios o comprobaciones experimentales, que no ha podido hacer porque carece de los establecimientos, recursos y elementos necesarios para ello.

Circulan profusamente prospectos de propaganda de criaderos de plantas, que producen semillas de pedigree, en cuyo frontispicio se lee : *Fiscalizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación*. Se ofrece allí nuevas panaceas a los agricultores, y cuando se busca en sus páginas la experiencia o ensayo oficial que compruebe y documente la excelencia, que se proclama, se encuentra las cartas de los propios agricultores, con juicios sencillos y empíricos, sin valor positivo, correspondientes a un solo año de cultivo, lo que no obsta a que la nueva variedad se difunda profusamente a todos los vientos sin ninguna garantía oficial verdadera. Porque en los mismos folletos se reconoce que las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura son muy pocas y por eso hay que procurarse la colaboración de los agricultores, que, en definitiva, son los que sufrirán las consecuencias de este lamentable estado de cosas. Ensayan a su propia costa.

La propaganda realizada en estas condiciones invade también las columnas de los grandes órganos de publicidad.

Ecólogos y genetistas reconocen que en el estudio y propagación de las nuevas variedades hay que tener en cuenta el factor biológico y el ambiente. No es posible hacer abstracción del medio. Es menester experimentar las variedades en las diferentes regiones para precisar su área de difusión. Y esto es lo que no se ha hecho ni se hará si no se crea la red completa de estaciones experimentales.

De no ser así, los propósitos de la Comisión de legislación agraria no podrán cumplirse por falta absoluta de elementos.

Por todo ello urge poner orden en esta materia. No es posible que continúe la anarquía y el negocio actual con las variedades de *pedigree*, que salen al mercado y sorprenden al agricultor, sin ninguna garantía del Estado ni de asociaciones respetables de productores, como sucede en Alemania y Estados Unidos. Hay que terminar con esta ficción. Créese, pues, la red completa de estaciones experimentales como con las famosas actas Hatch y Adam, en los Estados Unidos.

Hay que crear una legislación agraria coordinada y metódica

Debo terminar. El tiempo me ha faltado para decir todo lo que hubiera querido, pero trataré de subsanarlo al entregar estos papeles a la imprenta.

Anhelo con ello servir al país con la decisión, el entusiasmo y la buena fe que puse siempre en este propósito. Contribuyo así con el modesto aporte de mi conferencia, bajo los auspicios de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, a la obtención de una Ley de granos, que aproveche la experiencia extranjera y tenga en cuenta las modalidades del país. Para lograrlo requiere el despacho de la Comisión de legislación agraria un severo reajuste, por lo que han dicho algunos legisladores, como el diputado Pomponio, que reclamaba una legislación agraria coordinada y metódica, o el diputado Bustillo que anticipándose al porvenir, decía justamente : « Una organización que cumple, a juicio muy generalizado, deficientemente, la función de llevar al consumo el producto del campo, sólo puede ser reemplazada por otra organización bien estudiada que, cualesquiera sean las dificultades que ofrezca al iniciarse, tengamos la absoluta seguridad de que por la bondad del sistema y el acierto de su aplicación podrá batir a todos los enemigos que aparezcan para luchar contra ella con armas nobles o los que estén todavía escondidos, que son los más peligrosos. » (*Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación*, n° 9, pág. 277, mayo 31 de 1933.)

*Alberdi. La libertad y el progreso como intérpretes
de la Constitución Nacional*

Sea bienvenida la Ley de granos. No va en contra de nadie, sino en beneficio de todos. No coarta la libertad de comercio, sino que la fomenta. Los que proceden bien no tienen nada que temer, si así lo hacen, como afirman.

La Ley de granos puede y debe venir. No es un nuevo sistema cosmogónico ni va a poner en peligro la estabilidad de la Nación.

Los que invocan a Alberdi y la Constitución Nacional, han de recordar que ella ampara el bienestar de todos, y que ésa es su cláusula suprema.

Los que leyeron *Las Bases*, y exaltan el liberalismo económico de Alberdi, consulten *Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853*, para precisar bien el alcance de su pensamiento a este respecto.

« La interpretación — decía Alberdi, en *Las Bases* — el comentario, la jurisprudencia, es el medio de remediar los defectos de las leyes. Es la receta con que Inglaterra ha salvado su libertad y la libertad del mundo. La ley es un dios mudo : habla siempre por la boca del magistrado. Este la hace sabia o inicua. De palabras se compone la ley, y de éstas se ha dicho que no hay ninguna mala sino mal tomada. »

Y luego da la consigna infalible :

« Cuando la Constitución es obscura o indecisa, se debe pedir su comentario a la libertad y al progreso, las dos deidades en que ha de tener inspiración. Es imposible errar cuando se va por un camino tan lleno de luz. »

En nombre, pues, del progreso, de la libertad y de la justicia, la Carta Magna que ha hecho esta gran Nación, no ha de querer que la Ley de granos no sea.

Hoy como hace 100 años. Una página dramática de Echeverría

Y a los que digan que no la necesitamos; que hay que seguir así; que nadie la pide; que el progreso hincha las velas de nuestro desenvolvimiento agrario, yo les respondo con esta tremenda página de Esteban Echeverría, cuando en 1837, en su plan económico, pintaba la situación de nuestras campañas. ¿Quién no reconocería después de casi 100 años, la imagen actual del campo argentino?

« Sabido es que la labranza o industria agrícola entre nosotros está reducida a la siembra del trigo y maíz, y que la mayor parte de los que ejercen esta industria son unos pobres que no cuentan con más capital que el arado y sus bueyes, un campo, las más de las veces arrendado, y su trabajo personal. El primer renglón de subsistencia de la provincia depende del buen éxito del trabajo de los pobres labradores, pendientes, como dicen, de la bondad del año. Si hay sequía o mucha lluvia en ciertas épocas, la cosecha se pierde; si viene plaga de langosta la cosecha se pierde; y si en la sementera ha brotado mucha maleza la cosecha es mala. Ella depende, en fin, de mil accidentes que pueden sobrevenir y que la industria impotente no estorba con inteligencia.

« Malograda la cosecha, los infelices pierden su trabajo, se empeñan sobre el fruto de su trabajo venidero para poder subsistir mientras llega el buen tiempo; y, lejos de hacer ahorros para acumular riquezas, nunca salen de la miseria. Si la cosecha es buena, o ha sido bueno el año, para poder recoger su trigo, piden prestado; otros, enajenan el derecho de recogerlo a medias; otros lo venden en la sementera, porque ninguno tiene recursos para hacer frente a los gastos de levantarla.

« Aquí vemos dos hechos : por una parte, los labradores sin garantía alguna de buen éxito y adelanto en su industria, y por otra parte, la subsistencia de esta provincia pendiente del precario trabajo de esos labradores y de los accidentes naturales que pueden malograrlo.

« ¿Y es posible que no se hayan tomado providencias por nuestros gobiernos para fomentar este ramo de industria? ».

La Ley de granos

NOTA DEL PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS, INGENIERO F. PEDRO MAROTTA

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1932.

Señor presidente de la Comisión de Legislación Agraria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. doctor Miguel Angel Cárcano :

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como presidente del Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos, para hacerle llegar las siguientes conclusiones sobre el proyecto de Ley de granos, que tiene a estudio la Comisión de Legislación Agraria, de su digna presidencia.

Antiguo funcionario del Ministerio de Agricultura y ex delegado del mismo ante la Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, creo aportar con conocimiento de la materia, algunos antecedentes al respecto.

1º Comporta una plausible iniciativa, cuyos orígenes se remontan al año 1899, en que el primer ministro de Agricultura, doctor Frers, estableció la inspección de granos en forma facultativa.

Es procedente y necesario : no es una legislación de clase. Ni monopolio del Estado ni liberalismo económico sin freno, sino contralor del Estado, en nombre y en resguardo de derechos sociales y de intereses generales ;

2º El proyecto del Ministerio de Agricultura sólo se ocupa de la inspección de granos : por eso es deficiente porque debe, además, comprender : 1º el Pesaje ; 2º el Almacenaje, y 3º el Transporte del grano ;

3º La Ley de granos debe de ocuparse de la *Compraventa y Exportación* : la *Producción*, a pesar de las afinidades que tiene en el comercio, debe figurar aparte ;

4º Este error fundamental explica el hecho de que haya sido integrada la Comisión de Granos con funcionarios del Ministerio de Agricultura, como el director de agricultura, el jefe de estaciones experimentales, el jefe de agrónomos regionales, que nada tienen que hacer en ella, y que están absorbidos por funciones propias. Los comisionados de granos deben estar consagrados exclusivamente a esa tarea, que no permite distraerse en otras ocupaciones, siendo incompatible con otras funciones, como se establece en la Ley de granos del Canadá ;

5º El Estado carece de los órganos necesarios para controlar la producción : hay que comenzar por crearlos. No hay un instituto central de fitotecnia, ni estaciones experimentales de genética en las principales regiones productoras de trigo ;

6° La Comisión de granos debería estar formada por 3 ó 5 personas expertas, sin intereses directos con el comercio. No debe ser presidida por el ministro de Agricultura, que tiene muchos problemas a su cargo para ocuparse de ese asunto, en la forma que se propone. (Sería lo mismo que hacer presidir la Comisión de Vialidad, las Obras Sanitarias o los Ferrocarriles del Estado, por el ministro de Obras Públicas) ;

7° Hay que establecer dos instancias : la primera a cargo de las Cámaras Arbitrales o Gremiales y la segunda a cargo de la Comisión de granos ;

8° Las Cámaras Gremiales o Arbitrales estarán integradas por tres representantes del Estado y, además, por dos productores, un exportador, un corredor o acopiador y un molinero ;

9° Se establecerán *standards* oficiales y, mientras no se fijen definitivamente o para casos de emergencia (malas cosechas), se crearán grados comerciales, como tipos promedios de las cosechas ;

10. La inspección de embarques, en la forma que la propone el Ministerio de Agricultura, será poco menos que inocua : hay que hacer la extracción de muestras, obligatoriamente, en todos los casos, al costado del vapor. No es exacto que no pueda hacerse, ni que sea engorrosa o poco práctica ;

11. Hay que completar el proyecto de Ley de granos del Ministerio de Agricultura, incorporándole : el contralor de las balanzas ; el contralor de los elevadores y el contralor de los vagones, si ha de ser la ley reguladora del comercio. Véase la Ley de Canadá para comprobar la deficiencia del proyecto del Ministerio de Agricultura en el sentido indicado.

La ilustración del señor presidente y de los miembros de la comisión me eximen de entrar en mayores consideraciones. Ello no obstante, quedo a su disposición para las ampliaciones que juzgare necesarias.

Haciendo votos porque el país cuente con una completa Ley de granos, me es grato reiterar a usted mis sentimientos de alta consideración.

Roberto R. Frogone,
Prosecretario.

F. PEDRO MAROTTA,
Presidente.

PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1°. — La producción, compraventa y exportación de granos en la República se realizará bajo el contralor y vigilancia de la Comisión Nacional de Granos.

Art. 2°. — La Comisión Nacional de Granos funcionará como entidad autónoma bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura.

La presidirá el ministro de Agricultura, quien podrá ser reemplazado en el

ejercicio de su cargo por el director de Agricultura del Ministerio. Estará constituida por el director de Economía Rural y Estadística, el jefe de la División de Agrónomos Regionales, el jefe de Chacras Experimentales y tres representantes designados de una lista de diez personas presentadas por las entidades del país que agrupen a productores de granos en actividad y hayan obtenido personería jurídica del Poder Ejecutivo de la Nación o de las provincias. Para efectuar esas designaciones, el Poder Ejecutivo convocará, en la forma que establezca la reglamentación a las autoridades directivas de esas entidades.

En caso de empate, el presidente de la comisión estará facultado para desempatar. La Comisión tendrá su sede en la Capital Federal y durará cuatro años en el desempeño de sus funciones, las cuales serán remuneradas en proporción a la asistencia de sus miembros.

Ninguno de los miembros de la comisión podrá dedicarse al comercio de granos, en el interior o exterior. A ese efecto, se entenderá que los agricultores al vender su propia cosecha, no ejercen el comercio de granos.

Art. 3°. — No podrá difundirse en la República, sin la autorización previa de la Comisión Nacional de Granos, ninguna variedad nueva.

Los criaderos o particulares que produzcan o ensayen nuevas variedades, deberán remitir al Ministerio muestras de las mismas, para que, después de analizadas y comprobadas sus aptitudes, en las distintas zonas del país, sean autorizados por la Comisión a difundirlas. La autorización será expedida en un certificado, en el cual se dejará constancia de las características de la variedad y de las zonas, más adecuadas para su multiplicación.

La comprobación a que se refiere el párrafo segundo se realizará en las chacras experimentales, escuelas y otros establecimientos nacionales o provinciales. Podrá hacerse, también, en chacras o establecimientos particulares que ofrezcan gratuitamente sus servicios a la Comisión y se sometan a las normas que ésta les fije.

Art. 4°. — La Comisión Nacional de Granos sólo autorizará una variedad nueva, para su multiplicación y difusión, cuando ella represente un progreso sobre las variedades puras, ya existentes en la República, teniendo en cuenta, en el conjunto de aptitudes, con preferencia, las siguientes : calidad industrial, resistencia a las enfermedades, adaptación y rendimiento.

Art. 5°. — Los criaderos, instituciones privadas o los particulares, cuando deseen difundir variedades nuevas, estarán obligados a comunicar a la Comisión Nacional de Granos, con dos meses de anticipación por lo menos, el lugar en que se efectuarán las siembras, a fin de que aquélla pueda tomar las medidas para fiscalizar y estudiar el comportamiento de las nuevas variedades en comparación con las existentes en la zona.

Art. 6°. — Los criadores e instituciones privadas a que se refiere el artículo anterior deberán inscribirse en un registro especial que abrirá la Comisión de Granos y estarán autorizados a utilizar, en sus establecimientos y en el papel de su correspondencia, leyendas que digan : « Fiscalizado por la Comisión Na-

cional de Granos », y sólo podrán ofrecer a la venta variedades de semillas aprobadas por la Comisión.

La semilla que expendan lo será en bolsas precintadas por la Comisión de Granos, las cuales llevarán, en la forma que se establezca, una indicación que enuncie la fiscalización oficial, la variedad contenida y otras características.

Art. 7º. — La Comisión de Granos podrá, con anticipación de un año, previa aprobación del Poder Ejecutivo, prohibir la siembra de variedades nuevas que no ofrezcan ventajas para los intereses generales.

Art. 8º. — Para llegar en forma adecuada a la finalidad enunciada en el artículo anterior, la Comisión llevará a cabo las siguientes medidas :

a) Formulará un plan metódico, para toda la República, de ensayos comparativos de adaptación, rendimiento y resistencia a las enfermedades; épocas de siembra, etc., que hará conocer ampliamente ;

b) Propagará en toda forma las desventajas y peligros de cultivar variedades ya existentes de granos, y especialmente de trigos, que no reúnan las mejores aptitudes para su más fácil colocación en los mercados de consumo, de acuerdo con las exigencias de éstos y las características de los que compiten con nuestra producción ;

c) Confeccionará periódicamente un mapa de la distribución de las variedades existentes y el porcentaje del área sembrada con cada variedad y aconsejará a los agricultores las que deban sembrar en cada región.

Art. 9º. — La Comisión Nacional de Granos establecerá los tipos fijos que representen a cada zona de la República productora de cereales y oleaginosos, pudiendo proceder a su modificación cuando lo exija la producción.

A ese efecto se establecen las siguientes zonas :

I. Rosafé (Rosario, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero).

II. Entre Ríos.

III. Buenos Aires.

IV. Atlántico.

La Comisión Nacional de Granos determinará los límites de cada zona inmediatamente de promulgada esta ley. En lo sucesivo podrá, con autorización del Poder Ejecutivo, crear nuevas zonas o cambiar de límites de las existentes.

Art. 10. — Para la fijación de los tipos y límites de zona, la Comisión se guiará por estas normas fundamentales :

a) A cada zona debe corresponder un tipo de grano producido dentro de la misma, cuyas variedades, cuerpos extraños, color, estado sanitario, peso específico, humedad, etc., se agruparán por grados o números, pudiendo clasificarse hasta 5 grados de cada tipo ;

b) Para la determinación de los tipos se tendrán en cuenta estas características y cualidades por orden de importancia según el grano : 1º Variedad dominante y variedades semejantes en aptitud industrial; 2º Peso hectolítrico para el trigo, humedad y color para el maíz, cuerpos extraños para el lino;

3º Deficiencia de la calidad por causas extrínsecas; 4º Tolerancia de otras variedades, etc.

c) Deberá tenderse a que cada tipo esté constituido por una variedad dominante o por dos o más de la misma aptitud industrial, en el trigo, y de tipos uniformes en tamaño y color en los demás cereales y lino :

d) Para la formación de los grados, los límites que se fijarán de grado a grado, en cuanto al peso específico, serán de dos kilogramos por lo menos para el trigo; en un tanto por ciento de impurezas no oleaginosas en el lino; en un tanto por ciento de humedad y sanidad en el maíz; en peso y color en la cebada, avena, etc. :

e) No entrarán a formar parte de los tipos, ni podrán exportarse las variedades que la comisión Considere inaptas para esos fines, pero ella podrá declarar excepciones con respecto a alguna variedad actualmente cultivada, sin perjuicio de establecer un límite de tiempo, antes de prohibir su inclusión en los tipos y su venta al exterior.

Art. 11. — A fin de que la Comisión Nacional de Granos pueda cumplir con eficiencia la función señalada en el artículo anterior, será obligación de los dueños, empresarios o encargados de trilladoras y desgranadoras y de todos los que se dediquen a la producción de granos en la República, enviar por correo a la Comisión de Granos, en la forma y tiempo que ésta reglamentará, tres muestras lacradas y autenticadas, por variedad del producto.

La Dirección de Correos transportará esas muestras gratuitamente y con carácter de servicio oficial.

Art. 12. — La Comisión Nacional de Granos efectuará la propaganda y adoptará las medidas que sean indispensables para impedir el funcionamiento de máquinas de cosecha que no reunan los requisitos necesarios para obtener granos en las condiciones que la reglamentación respectiva establezca.

Art. 13. — La Comisión de Granos formará, en la cantidad que sea necesaria, muestra de cada « tipo » y « grado » de grano, y las hará llegar a las entidades de cada mercado consumidor que estime conveniente, y especialmente a las cámaras arbitrales de las plazas cerealistas, cónsules y otros representantes en el exterior. Dará también la más amplia difusión a las características de cada tipo y grado.

Art. 14. — Los tipos y grados que fije la Comisión serán los únicos que se cotizarán en las bolsas y mercados de cereales y a ellos deberán referirse las cotizaciones oficiales de pizarra y de todas las transacciones de granos para la exportación.

Art. 15. — Se tendrán con fuerza de ley los decretos del Poder Ejecutivo del 17 de marzo de 1932, sobre fiscalización de mercados a término y contratos a fijar. Las funciones que ellos encomiendan a la Dirección de Economía Rural y Estadística del Ministerio serán cumplidas por la Comisión Nacional de granos.

A ese efecto se declaran de jurisdicción nacional las bolsas de cereales y

mercados a término, debiendo, dentro del plazo de tres meses de promulgada esta ley, solicitar la aprobación de sus estatutos al Poder Ejecutivo de la Nación las bolsas y mercados que sólo tengan autorización de las provincias. Modifícanse, en lo pertinente, los artículos 33 y 45 del Código civil.

En lo sucesivo no se concederá personería jurídica a las Bolsas y mercados de cereales sin oír, previamente, a la Comisión Nacional de Granos.

Art. 16. — La Comisión otorgará, previa inspección, a cualquier productor, cooperativa o comerciante del país o del extranjero que lo solicite, un certificado del producto cosechado, depositado, vendido o comprado, en el cual conste el tipo, grado, peso y especificación de todos los detalles que sean necesarios para su más rápida y fácil comercialización.

Art. 17. — Toda persona viviente o jurídica que exporte granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Comisión Nacional de Granos. Sin ese requisito, las autoridades aduaneras de los puertos de la República no expedirán el permiso de embarque correspondiente.

Art. 18. — Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán remitir o entregar antes de terminar un embarque de granos a los funcionarios de la Comisión tres muestras lacradas, a razón de 300 gramos por cada 200 toneladas o fracción del producto embarcado y una declaración jurada, subscripta por el exportador o su apoderado, la cual contendrá las siguientes manifestaciones : nombre del exportador, puerto de embarque, nombre y matrícula del barco, puerto de destino, tonelaje embarcado, clase, zona, tipo y grado del grano y cualquiera otra indicación que establezca la comisión.

La Comisión podrá en cualquier momento, sin previo aviso, ordenar la toma de muestra de granos que se carguen para la exportación en cualquier puerto de la República. Esas muestras serán selladas y lacradas con intervención del representante del exportador y si éste se negara se hará con intervención de dos testigos.

Art. 19. — Las inspecciones a que se refieren los artículos 16 y 18 serán efectuadas con personal permanente de la Comisión, designado por concurso, o con personal o empresas que puedan realizar ese servicio técnico mediante una retribución fija por operación y ofrezcan las garantías materiales y morales que se establezcan.

Art. 20. — Si se comprobara falsedad en las muestras o declaraciones juradas a que se refiere el artículo 18, la Comisión, previo sumario del cual se dará vista al interesado, aplicará al infractor una multa hasta del 10 por ciento del valor del embarque, y en caso de reincidencia cancelará su nombre del registro de exportadores.

Art. 21. — La Comisión podrá impedir la salida de un cargamento de granos cuando no se haya cumplido con lo establecido en esta ley o desee comprobaciones relativas a su cumplimiento, o se hayan verificado mezclas prohibidas.

Art. 22. — La Comisión, además de las funciones y facultades señaladas en los artículos anteriores, estará autorizada a :

a) Ejercer el contralor de las cámaras gremiales y arbitrales de la Bolsa de Cereales, debiendo éstas ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que se establezcan, con aprobación del Poder Ejecutivo;

b) Reglamentar, con aprobación del Poder Ejecutivo, las operaciones de compraventa de granos en todo lo que no esté previsto en la presente ley;

c) Designar tribunales gremiales de apelación que entiendan en las divergencias sobre el cumplimiento de reglamentos y contratos relativos a la compraventa de granos;

d) Indicar el texto de los distintos formularios uniformes de contratos de compraventa de granos, a los cuales deberán ajustarse todas las transacciones;

e) Establecer las condiciones que deberán reunir las bodegas para que los cargamentos embarcados en los puertos de la República lleguen a destino en buenas condiciones;

f) Ejercer el contralor de los cargamentos de granos en los puertos de destino, cuando lo juzgue necesario y por los medios que estime más convenientes, en todo lo relativo al estado y calidad de los mismos, utilizando los servicios de funcionarios oficiales o de empresas técnicas especializadas;

g) Prohibir la exportación de mezclas que puedan desmejorar la calidad de los granos tipificados o de cereales u otros productos aislados que puedan servir para realizar esas mezclas;

h) Organizar en el exterior una propaganda comercial destinada a difundir el conocimiento auténtico de los granos del país y la investigación indispensable para conocer las necesidades y características de cada mercado;

i) Hacer, en el país y en los mercados consumidores, todas las publicaciones que sirvan a los propósitos de esta ley;

j) Realizar, por intermedio de los laboratorios a que se refiere el artículo 24, estudios sobre mezclas de trigos argentinos con extranjeros, a fin de hacer conocer en cada mercado de consumo las mejores mezclas para panificación;

k) Designar el personal que sea necesario, mediante concursos de selección, para lo cual dará preferencia, a igualdad de condiciones, a los egresados de las escuelas e institutos de agricultura;

l) Aprobar su presupuesto anual de gastos, con la obligación de someterlo al Poder Ejecutivo, quien podrá modificarlo o disminuirlo y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Honorable Congreso;

m) Elevar cada año al Honorable Congreso una memoria descriptiva de toda la actividad desarrollada.

Art. 23. — Para sufragar los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, la Comisión, con aprobación del Poder Ejecutivo, podrá establecer una contribución hasta de dos centavos por quintal de grano exportado, la cual será pagada por el exportador.

Esos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Na-

ción y contra ella sólo podrá girarse con la firma del presidente y dos miembros de la comisión, designados especialmente por la misma.

Art. 24. — Pasarán a depender de la Comisión Nacional de Granos los Laboratorios de Panificación y Análisis de Semillas y la Inspección de Semilleros Fiscalizados del Ministerio de Agricultura, debiendo la Comisión dotarlos de todos los elementos técnicos que sean indispensables para el desempeño de sus tareas. De los fondos recaudados, la Comisión de Granos asignará una parte, con destino especificado, para fomento de estudios e investigaciones especiales de las secciones técnicas del Ministerio de Agricultura que juzgue conveniente y con cargo, por parte de éstas, de rendir cuenta.

Art. 25. — Todo el que exporte granos del país estará obligado a facilitar, en los puertos de destino, el contralor de los cargamentos a que se refiere el inciso *f*) del artículo 22, como asimismo durante el viaje, los estudios y comprobaciones experimentales que la Comisión de Granos resuelva realizar sobre humedad, temperatura y acondicionamiento de bodegas, a fin de adoptar, oportunamente, las medidas útiles para la defensa de la producción.

Art. 26. — La Comisión podrá cancelar del registro respectivo el nombre del exportador que no diera cumplimiento a lo que establece el artículo anterior.

Art. 27. — La Comisión con el concurso de la División de Agronomía Regional del Ministerio de Agricultura, aconsejará las medidas y sistemas más apropiados de conservación de los granos en las chacras y depósitos, en defensa de su valor comercial.

Art. 28. — La Comisión contribuirá a vigilar el cumplimiento de las disposiciones de carácter sanitario, que adopten el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Higiene.

Art. 29. — La Comisión de granos al proyectar los reglamentos que manda esta ley, para someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo, tendrá en cuenta los antecedentes que informen el despacho de la comisión especial designada por la resolución ministerial del 13 de abril de 1932.

Art. 30. — Los infractores a los dispuestos en esta ley y a las reglamentaciones que se adopten en cumplimiento de ella, cuando no se hayan establecido penas especiales, serán penados con multa de 500 a 10.000 pesos. La Comisión aplicará esas multas y los interesados podrán apelar de ellas, previo depósito de su importe, ante los juzgados federales de sección.

Art. 31. — Esta ley se tendrá por incorporada a los Códigos civil, penal y de comercio, quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan a ella.

Art. 32. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley y adoptará las providencias necesarias para que la Comisión quede constituida dentro de los tres meses de la promulgación.

Art. 33. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTONIO DE TOMASO.

DESPACHO SOBRE LEY DE GRANOS FORMULADO POR LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN AGRARIA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN.

Honorable Cámara :

La Comisión de Legislación Agraria ha estudiado el mensaje y proyecto de Ley de granos remitido por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley presentado por el señor diputado Lazo, sobre régimen de la compraventa de maíz, trigo y lino; y por las razones que dará su miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Comisión nacional de granos

Artículo 1º. — Créase la Comisión Nacional de Granos, que funcionará como entidad autónoma, dependiente del Ministerio de Agricultura, y estará integrada por cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

El presidente y un vocal, que ejercerá la vicepresidencia, representarán al Poder Ejecutivo; dos a las Asociaciones de Productores Agrarios y uno a las Bolsas de Cereales.

Las designaciones de estos tres últimos vocales se harán por el Poder Ejecutivo, eligiéndolos de una lista de diez personas que elevarán las entidades respectivas que existan en el país y hayan obtenido personería jurídica del Poder Ejecutivo de la Nación o de las provincias.

El presidente de la Comisión tendrá la representación legal de la misma, y, en caso de empate, estará facultado para desempatar.

Art. 2º. — Los miembros de la Comisión Nacional de Granos durarán cuatro años en sus funciones, podrán ser reelectos y se renovarán por mitades cada dos años y por sorteo la primera vez, excepto el presidente.

La remuneración del presidente será de mil quinientos pesos moneda nacional mensuales; la del vice presidente de mil pesos moneda nacional mensuales y las de los tres vocales restantes de dos mil quinientos pesos moneda nacional mensuales, que se prorratearan entre ellos, en proporción a su asistencia a las sesiones.

Artículo 3º. — El presidente y el vicepresidente no podrán ejercer actividades que se relacionen directa o indirectamente con el comercio de granos.

Los miembros de la Comisión Nacional de Granos dedicarán todo su tiempo al cumplimiento de sus deberes con arreglo a esta ley, y no aceptarán ni desempeñarán ninguna otra función o empleo nacional, provincial o municipal.

Facultades y deberes de la Comisión

Art. 4º. — La Comisión Nacional de Granos tendrá las siguientes facultades y deberes :

a) Ejercer el contralor de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos, las cuales deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo ;

b) Establecer los tipos fijos que correspondan a la producción de granos en las diversas zonas de la República y determinar los límites de esas zonas, pudiendo variarlos cuando sea necesario ;

c) Establecer las condiciones que deberán reunir los vagones de ferrocarril, camiones de transporte y las bodegas de exportación para que los cargamentos lleguen a destino en buenas condiciones ;

d) Realizar durante el viaje de los cargamentos destinados a la exportación, los estudios y comprobaciones experimentales que considere pertinentes sobre humedad, temperatura y acondicionamiento de bodegas, a fin de adoptar, oportunamente, las medidas útiles para la defensa de la producción ;

e) Ejercer el contralor de los cargamentos de granos en los puertos de destino, cuando lo juzgue necesario y por los medios que estime más convenientes, en todo lo relativo al estado y calidad de los mismos, utilizando los servicios de funcionarios oficiales o de empresas técnicas especializadas ;

f) Vigilar el cumplimiento y la aplicación de los decretos reglamentarios de la presente ley y de los que expida el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 ;

g) Organizar en la República y en el exterior una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley, el conocimiento auténtico de los granos del país y la investigación indispensable para conocer las necesidades o características de cada mercado ;

h) Designar el personal permanente que sea necesario, mediante concurso de selección, para lo cual dará preferencia, a igualdad de condiciones, a los egresados de las escuelas e institutos de economía y agricultura ;

i) Aprobar su presupuesto anual de gastos, con la obligación de someterlo al Poder Ejecutivo, que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Honorable Congreso ;

j) Elevar cada año al Honorable Congreso una memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

Fijación de tipos y zonas

Art. 5º. — Previo asesoramiento de los Laboratorios de Panificación y de Análisis de semillas, jefe de agrónomos regionales y de chacras experimenta-

les y de la Inspección de semilleros fiscalizados por el Ministerio de Agricultura, la Comisión, para la fijación de los tipos y límites de zonas, se guiará por estas normas fundamentales :

a) A cada zona deberá corresponder un tipo de grano producido dentro de la misma, cuyas variedades, cuerpos extraños, color, estado sanitario, peso específico, humedad, etc., se agruparán por grados o números, pudiendo clasificarse varios grados de cada tipo ;

b) Para la determinación de los tipos se tendrán en cuenta estas características y cualidades por orden de importancia, según el grano :

1º Variedad dominante y variedades semejantes en aptitud industrial ;

2º Peso hectolítrico para el trigo ; humedad y color para el maíz ; cuerpos extraños para el lino ;

3º Deficiencias de la calidad por causas extrínsecas ;

4º Tolerancia de otras variedades ;

c) Deberá tenderse a que cada tipo esté constituido por una variedad dominante o por dos o más de la misma aptitud industrial, en el trigo, y de tipos uniformes en tamaño y color en los demás cereales y lino ;

d) Para la formación de los grados se fijarán los límites de grado a grado, en cuanto al peso específico, para el trigo ; en un tanto por ciento de impurezas no oleaginosas para el lino ; en un tanto por ciento de humedad y sanidad, para el maíz ; en peso y color para la cebada, avena, etc. ;

e) No entrarán a formar parte de los tipos, las variedades que la Comisión considera inaptas para esos fines.

Art. 6º. — A los fines del artículo anterior será obligación de los dueños, empresarios o encargado de trilladoras, cosechadoras y desgranadoras, enviar por correo a la comisión, en la forma y tiempo que ésta reglamentará, dos muestras lacradas y autenticadas, por variedad de productos.

La Dirección de Correos transportará esas muestras gratuitamente y con carácter de servicio oficial.

Art. 7º. — La Comisión Nacional de Granos formará, en la cantidad que sea necesaria, muestras de cada « tipo » y « grado » de grano y las hará llegar a las entidades de cada mercado extranjero, que estime conveniente y especialmente a las cámaras arbitrales de las plazas cerealistas, cónsules y otros representantes en el exterior. Dará también la más amplia difusión a las características de cada tipo y grado.

Art. 8. — Los tipos y grados que fije la Comisión serán los que se cotizarán en las bolsas y mercados de cereales y a ellos deberán referirse las cotizaciones oficiales de pizarra y todas las transacciones de granos.

Las mezclas sólo podrán ser exportadas con la calificación de tales.

Certificados

Art. 9º. — La Comisión otorgará, previa inspección, a cualquier productor, cooperativa o comerciante del país o del extranjero que lo solicite, un certificado del producto cosechado o depositado, en el cual conste el tipo, grado, peso y especificaciones de todos los detalles que sean necesarios para su más rápida y fácil comercialización. La Comisión establecerá las garantías y formas en que se expedirán estos certificados y se realizará la inspección.

Art. 10. — Los elevadores locales otorgarán un certificado provisorio de los granos que reciban, en el cual consten las mismas características y especificaciones enumeradas en el artículo anterior, más la cantidad.

Los certificados provisorios otorgados por los elevadores locales serán canjeados oportunamente por un certificado definitivo que, previa inspección oficial, entregará la Comisión Nacional de Granos.

Art. 11. — Los certificados provisorios y definitivos de los granos que reciban los elevadores, harán fe de las cantidades y tipos a que se refieren, serán legalmente transferibles por simples endosos y acreditarán en favor del poseedor la propiedad de los granos almacenados.

Art. 12. — Contra devolución o presentación del certificado debidamente endosado, el elevador deberá entregar el grano en él indicado, y la Comisión establecerá la forma de pago de los derechos, responsabilidad del elevador, oportunidad tiempo y lugar de la entrega.

Art. 13. — La Comisión podrá establecer la obligatoriedad de los certificados por zonas, a medida que lo juzgue conveniente, teniendo en cuenta la organización de la red de elevadores y las condiciones de producción y comercialización de granos y oleaginosos.

Art. 14. — Todas las divergencias referentes a las constancias de los certificados serán apelables en la forma y ante los organismos técnicos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.

Comercio de granos

Art. 15. — Toda persona, viviente o jurídica, que exporte granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Comisión Nacional de Granos. Sin este requisito, las autoridades aduaneras de los puertos de la República no expedirán el permiso de embarque correspondiente.

Art. 16. — Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán remitir o entregar, antes de terminar un embarque de granos, a los funcionarios de la Comisión, de acuerdo a las condiciones y especificaciones que la misma determine, tres muestras lacradas del término medio del producto embarcado y una declaración suscrita por el exportador o su apoderado, que contendrá las siguientes manifestaciones : nombre del exportador, puerto de destino, tonelaje

embarcado, clase, zona, tipo y grado del grano y cualquiera otra indicación que la Comisión establezca.

Será obligación de los exportadores declarar el destino definitivo de los cargamentos de granos y oleaginosos denunciados como embarques « a órdenes », dentro del plazo y requisitos que reglamentará la Comisión Nacional de Granos.

Art. 17 — La Comisión podrá, en cualquier momento, ordenar la toma de muestras de granos que se carguen para la exportación en cualquier puerto de la República. Esas muestras serán selladas y lacradas con intervención del representante del exportador, y si éste se negara, con intervención de dos testigos.

Art. 18. — Las inspecciones previstas en los artículos 9, 10 y el anterior, serán efectuadas con personal permanente de la Comisión o con personas o empresas que puedan realizar ese servicio técnico mediante una retribución fija por operación, siempre que ofrezcan garantías materiales y morales y se ajusten a los requisitos que establezcan las reglamentaciones a dictarse por la Comisión.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo queda autorizado a reglamentar, con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Granos, las condiciones en que podrán realizarse las transacciones sobre granos y el funcionamiento de los mercados a término y bolsas de cereales. A ese efecto se declaran de jurisdicción nacional las bolsas de cereales a término, debiendo, dentro del plazo de tres meses de promulgada esta ley, solicitar la aprobación de sus estatutos al Poder Ejecutivo de la Nación, las bolsas y mercados que sólo tengan autorización de las provincias.

En lo sucesivo no se concederán autorizaciones para el funcionamiento de nuevos mercados y bolsas sin dar vista a la Comisión.

Fomento de la genética

Art. 20. — Los criaderos, instituciones privadas o particulares que se dediquen al comercio de semillas, no podrán difundir en la República ninguna variedad nueva de granos sin la autorización previa del Ministerio de Agricultura.

Los criaderos que produzcan o ensayen nuevas variedades deberán remitir al Ministerio muestras de las mismas para que, después de analizadas y comprobadas sus aptitudes en las distintas zonas del país, sean autorizadas por la Comisión a difundirlas. La autorización será expedida en un certificado, en el cual se dejará constancia de las características de la variedad y de las zonas más adecuadas para su multiplicación.

La comprobación a que se refiere el párrafo anterior se realizará en las charcas experimentales, escuelas y otros establecimientos particulares que ofrezcan gratuitamente sus servicios al Ministerio y se sometan a las normas que éste les fije.

Art. 21. — El Ministerio de Agricultura sólo autorizará una variedad nueva para su difusión cuando ella represente un progreso sobre las variedades puras ya existentes en la República, teniendo en cuenta, en el conjunto de aptitudes, con preferencia las siguientes : calidad industrial, resistencia a las enfermedades, adaptación y rendimiento.

Art. 22. — Las personas o entidades a que se refiere el artículo 20, cuando deseen difundir o comerciar variedades nuevas, estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Agricultura, con dos meses de anticipación, por lo menos, el lugar en que se efectuarán las siembras, a fin de que éste pueda tomar las medidas para fiscalizar y estudiar el comportamiento de las nuevas variedades en comparación con las existentes en la zona.

Art. 23. — Los criaderos e instituciones privadas a que se refiere el artículo anterior deberán inscribirse en un registro especial que abrirá el Ministerio de Agricultura y estarán autorizados a utilizar en sus establecimientos, y en el papel de su correspondencia, leyendas que digan : « Fiscalizados por el Ministerio de Agricultura », y sólo podrán ofrecer a la venta variedades de semillas aprobadas por éste.

Las semilla que expendan lo será en bolsas precintadas por el Ministerio de Agricultura, las cuales llevarán, en la forma que se establezca, una indicación que enuncie la fiscalización oficial, la variedad contenida y otras características.

Art. 24. — Para llegar en forma adecuada a las finalidades enunciadas en los artículos anteriores, el Ministerio de Agricultura llevará a cabo las siguientes medidas :

a) Formulará un plan metódico, para toda la República, de ensayos comparativos de adaptación, rendimiento y resistencia a las enfermedades, épocas de siembra, etc., que hará conocer ampliamente.

b) Propagará en toda forma las desventajas y peligros de cultivar variedades ya existentes de granos, y especialmente de trigos, que no reúnen las mejores aptitudes para su más fácil colocación en los mercados de consumo, de acuerdo con las exigencias de éstos y las características de los que compiten con nuestra producción ;

c) Confeccionará periódicamente un mapa de la distribución de las variedades existentes y el porcentaje del área sembrada con cada variedad, y aconsejará a los agricultores las que deban sembrar en cada región.

Art. 25. — El Ministerio de Agricultura tendrá al corriente de las actividades e investigaciones a que se refieren los artículos anteriores a la Comisión Nacional de Granos ; y ésta le prestará para desarrollarlas la ayuda pecuniaria que le permitan sus recursos.

Recursos de la Comisión

Art. 26. — Para el cumplimiento de lo prescripto en esta ley, la Comisión Nacional de Granos dispondrá de los siguientes recursos :

a) Una contribución hasta de dos centavos por quintal de grano exportado, la cual será fijada anualmente por la Comisión con aprobación del Poder Ejecutivo, y pagada por el exportador;

b) El producido de las inspecciones, derechos y multas, por infracciones a la presente ley y a sus reglamentaciones.

Esos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, y contra ella sólo podrá girarse con las firmas del presidente y de los miembros de la Comisión designados especialmente por la misma.

Disposiciones especiales

Art. 27. — Todos los infractores a lo dispuesto por esta ley, y a los reglamentos que se adopten para su cumplimiento, serán penados con multas de 500 a 10.000 pesos moneda nacional, cuando no se hayan establecido penas especiales.

Si la Comisión comprobara falsedad en las muestras o declaraciones previstas en el artículo 16, cancelará, en caso de reincidencia, el nombre del infractor del registro de exportadores.

La Comisión aplicará esas multas, y los interesados, en cualquier caso, podrán apelar de ellas, previo depósito de su importe, ante los juzgados federales de sección.

Art. 28. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley y adoptará las providencias necesarias para que la Comisión Nacional de Granos quede constituida dentro de los tres meses de su promulgación.

Art. 29. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(Tomado del libro *Mensajes, proyectos de ley, decretos, etc.*, del Ministerio de Agricultura, año 1932, publicado en 1933, donde el despacho transcripto se publica sin firmas).